

PODER ROBRE RO

Nº 1

SUMARIO

desarrollo capitalista y ecología

la lucha del pueblo palestino
y los juegos olímpicos

Chile: declaración de "El Arrayan"
fábrica y escuela



DESARROLLO CAPITALISTA Y ECOLOGIA

En Francia, la contestación del modelo de desarrollo capitalista no ha venido del movimiento "hippy", sino que ha nacido de una parte del movimiento obrero y estudiante. Recordemos Mayo del 68.

En la CFDT, desde hace varios años, nuestra reflexión colectiva ha ido profundizando en esta cuestión; después de Galbraith y su tesis sobre el productor-roy y el consumidor-siervo, es André Jeanson quien, en nuestro último congreso, denunciaba el condicionamiento de la sociedad de consumo que hace aceptar a los ciudadanos la miseria de las necesidades colectivas. Antes del Informe del M.I.T. y de la carta de Sicco Mansholt, nosotros habíamos elaborado un documento confederal denunciando la rapiña, lo absurdo de los métodos de debilitamiento voluntario de la calidad de los productos, la renovación a celerada de los modelos lanzados sobre el mercado, y en el cual se reivindicaba la incorporación del coste de los perjuicios en el precio de los productos.

Sin embargo el informe del M.I.T. y los juicios de técnicos, hombres políticos, intelectuales, sobre la degradación del ambiente, sobre la puesta en cuestión del tipo de crecimiento, son de un gran interés pues aceleran un debate político fundamental, una toma de conciencia indispensable, y hace aparecer, justamente en el corazón del sistema y de la tecnoestructura, voces que muestran con estrépito una gran contradicción de nuestra sociedad.

Hay, ciertamente, reservas que hacer a las perspectivas catastrofistas que nos son presentadas a menudo. La evolución no es fatal, las cifras son contestables y, sobre todo, en el tiempo de la prospectiva el alargamiento de tendencias pasadas es cada vez más un método inadecuado para prevenir.

Sin embargo es verdad que el capitalismo ha mostrado, a la vez que una formidable capacidad de adaptación, una dinámica fundamentalmente conservadora. Todas las modificaciones e innovaciones del sistema se sitúan, efectivamente, dentro de una lógica implacable: la del beneficio como motor del desarrollo, la de la acumulación del capital como modo de desarrollo, la del crecimiento considerado como el aumento de la venta de productos rentables, la de los límites puestos a la creatividad por la necesidad de mantener el poder entre las manos de una minoría. Este es el aspecto central de la demostración, que se sitúa en el corazón del sistema, y por eso provoca nuestra adhesión. El porvenir de la humanidad es incompatible con el modo de producción capitalista.

El crecimiento como meta de la economía de mercado, la ideología del consumo-obsesión, el consumo de objetos rentables como finalidad, no solamente no responden a las aspiraciones de los seres humanos sino que tampoco pueden ser perseguidos sin conducir al mundo a la catástrofe.

adhesión generalizada e inmediata por parte de la población, ya que las necesidades que expresa hoy en día la población son necesidades condicionadas, inducidas por el modo de desarrollo. En efecto, el ser humano es, por una parte, un producto cultural, un producto del conjunto social en el que vive y del cual constituye un elemento activo. Vivir es establecer relaciones dialécticas con el conjunto de estructuras, instituciones, clases y personas, con el conjunto de las condiciones materiales, culturales y naturales.

Romper el condicionamiento no puede por lo tanto consistir en privilegiar la defensa de la naturaleza sobre la totalidad de los demás elementos de este conjunto. El verdadero crecimiento es el mejoramiento de las satisfacciones del ser humano en sus relaciones con todo lo que le rodea, es el mejoramiento de las condiciones que le permitan construir su personalidad, es la medida de los progresos realizados en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. La comprensión de la inter-dependencia de los elementos que constituyen el entorno del ser humano es un progreso de la conciencia universal, a la cual la biología ha contribuido poderosamente en el período reciente.

La aproximación ecológica debe situarse en un conjunto y no centrarse en un mítico ruralismo o sobre un utópico retorno a la naturaleza. Nosotros rechazamos en este sentido toda la concepción actual del crecimiento y su cálculo, ese cálculo que elimina los servicios fuera del mercado, la calidad de las relaciones inter-personales, el tipo de condiciones de trabajo, el valor del urbanismo, y quien, como "contrapartida", suma el coste de las bombas atómicas al de los accidentes de carretera, al de la lucha antipolución. Ese cinco por ciento de crecimiento anual con el que se nos machaca las orejas, no tiene ningún sentido. Un régimen socialista democrático deberá determinar, políticamente, los valores relativos al conjunto de elementos cuantitativos y cualitativos que respondan a las necesidades humanas fundamentales.

Esto quiere decir que el crecimiento es necesario a nuestro entender y que la expresión "crecimiento cero" es una negación del desarrollo de la humanidad. Tanto en materia económica como técnica, se puede olvidar todo lo que ha habido de progresos reales aliviando las calamidades de los seres humanos?. Se puede olvidar la necesidad de proseguir esos progresos para superar el estadio del trabajo en parcelas y embrutecedor para millones de trabajadores?. Si la urbanización salvaje o la urbanización a todo precio es condenable, las ciudades no son, sin embargo, un progreso que permite cada vez a un mayor número de gente beneficiarse de equiparamientos colectivos, de tener una gama más amplia de contactos humanos, una mayor diversidad de informaciones, una posibilidad mejor de contruir su personalidad, una mayor libertad?; igualmente el placer de la velocidad por la velocidad no es una finalidad, pero la velocidad es también la posibilidad para un gran número de gente de conocer otras personas, otros países, otras culturas, de acelerar la comunicación.

Es por esto que no es necesario oponer defensa de la naturaleza y mejoramiento de la suerte de los discriminados, de los que no tienen una vivienda digna, de los parados. No hace falta oponerse a la naturaleza, sino construirla: lo propio del ser humano es construir más y más el espacio en el cual vive.

Por lo tanto a lo que nosotros nos oponemos es al tipo de crecimiento que se nos propone, ese proceso del cual no se puede decir hoy que vaya en el sentido de mejorar la situación humana, y del cual ciertos especialistas nos advierten que, en efecto, se trata de un crecimiento hacia la muerte.

Las mejoras del modo de vida deben, para nosotros, manifestarse por las satisfacciones crecientes en la vida social, por una participación cada vez más grande de los individuos en la determinación de su suerte y su porvenir,

convirtiéndose cada uno en actor dentro de la autogestión y la planificación. Entonces, colectiva y democráticamente, la sociedad podrá atribuir un valor verdadero a sus necesidades de educación, de salud, de urbanismo, de relaciones sociales, tanto como a sus necesidades materiales; podrá comparar entre estas necesidades y elegir.

Pero este cambio de orientación en el sentido del crecimiento supone una desalienación de los seres humanos, una liberación de sus aspiraciones fundamentales. Es decir, que no se trata solamente de eliminar el capitalismo en el sentido estrecho de la propiedad privada de los medios de producción sino también de suprimir todos los poderes jerárquicos, los de los países de Occidente como los de los países del Este, los de todos los sistemas donde la opción de las necesidades a satisfacer es efectuada desde lo alto en nombre del capital, en nombre de la ciencia, o en nombre del partido e impuesto a la población. Y es en este sentido que es preciso criticar las soluciones propuestas por Sisco Mansholt.

No solamente nos parecen en cierto sentido malthusianas -en particular el recular del bienestar material enunciado de una manera general, indiferenciada- sino que son también esencialmente autoritarias. Sobre todo, la línea propuesta hace pensar en medidas que darían a los científicos la tarea de imaginar y al gobierno de imponer, sometiendo al silencio el derecho de la población a determinar por ella misma sus prioridades. Si el capitalismo, en la definición de la C.F.D.T., es a la vez un sistema de propiedad privada y de dominación, entonces la crítica realizada no es suficiente para ser anticapitalista.

Veamos, por otra parte, al respecto la posición de las clases dominantes. Están haciendo todo lo que pueden por remontar esta crisis del sistema con una campaña de insatisfacción alrededor de la lucha contra la contaminación, vista como una defensa de la naturaleza, en la cual todo el mundo, desde el peón hasta el gerente, debe adherirse solidariamente contra los riesgos engendrados por un progreso técnico considerado como neutro, como indeterminado y contra los abusos a los que puede conducir la "naturaleza humana".

Como no es cuestión de disminuir los beneficios sino por el contrario de aumentarlos, ya que las medidas anti-polución son costosas, es necesario que todos los individuos acepten pagar el costo anti-polución, bien como consumidores o como contribuyentes y, para eso, cada uno debe sentirse culpable contaminador. La revuelta es así recuperada, transformada en una nueva fuente de beneficios. Las clases dominantes buscan, al mismo tiempo, el crear un sentimiento de solidaridad objetiva entre el que manda y el que ejecuta, a través de la contaminación, e inducirles a una colaboración inter-classes.

Los detentadores del poder se defienden así, prosiguiendo el crecimiento a través de la contaminación, e inducirles a una colaboración inter-classes.

Los detentadores del poder se defienden así, prosiguiendo el crecimiento a través de la lucha anti-polución, a la vez sobre el plano económico -pues suponen nuevos mercados- y sobre el plano ideológico transformando un problema social de clase, en un problema de moral individual. Las previsiones de ciertos hombres políticos y científicos pueden por lo tanto, ser recuperadas por el sistema; se tiene a menudo la impresión de que no tratan de poner en cuestión un sistema económico-social fundado en la dirección de la colectividad por una minoría de privilegiados, sino que se trata de advertir a éstos de que tengan cuidado; se arriesgan a perder el poder. ¿No se trata, por tanto, de fortificar el sistema en vez de dar el poder al pueblo?

Se nos puede objetar que el capitalismo no podrá seguir siendo el mismo si frena su tipo de desarrollo. Nosotros responderemos que no nos interesa mucho el que la salida pueda ser un sistema autoritario, tecnocrático y exigente, otro tipo de dominación en definitiva, en un proceso de cambio que

conduciría, puede ser, a estabilizar la producción industrial -¿pero qué producción? y ¿para quien?- y a renunciar a ciertas libertades -¿pero qué libertades? y ¿quien sería privado de ellas?-.

El cambio a que aspira el Movimiento Obrero no tiene nada que ver con esta solución desigual y despótica. La verdadera solución supone la movilización de la opinión pública, no solamente contra una especie de catástrofe de la cual nadie sería directamente responsable, sino contra las prioridades impuestas por la clase que monopoliza el poder. Para cambiar la sociedad es necesario otro tipo de relaciones sociales, de estructuras, dando el poder de decidir su porvenir al conjunto de ciudadanos al fin desalienados.

Es preciso concebir relaciones sociales y humanas sobre una base igualitaria, excluyendo toda discriminación de sexo, de clase o de raza. Es preciso realizar la autogestión y la planificación autogestionada en un sistema de propiedad social de los medios de producción, donde la defensa del medio ambiente adquiera su verdadera dimensión -la de una transformación de las relaciones del ser humano con la naturaleza y de las relaciones de los hombres entre ellos-, que conduciría a reconsiderar el tipo de desarrollo industrial y la designación de recursos; de donde podría salir un nuevo humanismo.

Esta movilización es prioritaria, mucho más que la definición de la polución o la cuestión de saber quien va a pagar el coste de la polución. No es que no falten soluciones técnicas, instalaciones antipolución en la construcción de fábricas o de grandes conjuntos urbanos, o nuevas concepciones del urbanismo o de los transportes colectivos; pero la prioridad es hacer a los ciudadanos, a los trabajadores, conscientes de la manipulación de que son objetos, y esto a través de una información permanente objetiva y total. Hay que animar la conciencia activa de los trabajadores ante el problema, a fin de que otros no hablen en su lugar de las modificaciones del modo de desarrollo con el solapado fin de consolidar su poder.

Esta información, esta toma de conciencia deben, evidentemente, ser efectuadas a escala internacional y en primer lugar europea. Las organizaciones sindicales pueden ser en este sentido el motor. Lo cual supone que no traten de calmar la inquietud provocada por los especialistas del medio ambiente. Supone que no reenvien la reflexión y la acción sobre el tipo deseable de desarrollo al momento en que el poder central habrá cambiado de manos; que no tengan miedo de criticar, desde ese punto de vista, el modo de crecimiento de los países del Este en la medida en que en ellos se rehúse poner en cuestión este tipo de desarrollo de las fuerzas productivas y el determinar las finalidades del crecimiento por el conjunto de la población.

En la medida en que las investigaciones y los trabajos en curso sobre el medio ambiente, la ecología, el crecimiento, reflejan una crisis real, una contradicción profunda del capitalismo, nosotros no nos equivocaremos de camino y formularemos en este sentido críticas y proposiciones que serán sentidas como verdaderas por la masa de trabajadores y de la población. Tenemos en este problema un medio de acción, de movilización y el movimiento obrero puede volver a encontrar en esta tarea la solidaridad indispensable con los intelectuales para soldar la clase motriz de la transformación social alrededor de un proyecto colectivo común, que no puede ser mas que socialista y de autogestión.

EDMOND MAIRE

Secretario General de la CFDT



LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO Y LOS JUEGOS OLIMPICOS

El audaz golpe político de los guerrilleros palestinos en los juegos olímpicos de Munich, raptando a un grupo de deportistas israelitas -golpe que acabó con la muerte de los raptadores y rehenes al negarse el gobierno israelita a cumplir las exigencias de los guerrilleros palestinos de poner en libertad un determinado número de prisioneros palestinos y de otras naciones árabes en poder de Israel, y al no cumplir la policía alemana su promesa de dejar marchar de su territorio a los guerrilleros, sino que por el contrario preparó una trampa para matarlos a todos-, ha servido para que se desencadene una ola de informaciones y posicionamientos a nivel internacional, participando en ellos algún país socialista.

La hipocresía comienza al querer plantear las Olimpiadas, el "espíritu olímpico", como un acontecimiento neutro y sin vinculación con la política. Pero ya hace muchos años que esto no es así. Las naciones participan en las Olimpiadas, dedican miles de millones a su preparación con un interés, mas que deportivo, de propaganda política nacionalista. Veamos algunos datos. Desde 1917 -año de la revolución soviética- hasta 1952, los rusos no pudieron participar en las Olimpiadas... por comunistas. Por el mismo motivo, actualmente no participa China. En las Olimpiadas posteriores a las dos guerras mundiales los países derrotados no pudieron participar. ¿No es eso política?, ¿Podría ir a Munich un atleta español que hiciera profesión pública de socialista?. Por supuesto, Palestina tampoco participaba en Munich; no estaba para Juegos. La lucha de su pueblo por la supervivencia física y nacional le exigía tareas más urgentes.

Los medios de información y otras instituciones capitalistas, con una

hipocresía increíble, se han lanzado a dar lecciones de moralismo, hablando de "barbarie", de "masacre" etc. Realmente bien pocas lecciones pueden dar a nadie, mucho menos a Palestina. Porque, ¿cómo se puede llamar el genocidio de Vietnam?, ¿la mantanza de mujeres y niños?, ¿cómo los muertos de Ferrol, Granada, Eran dio, Seat, etc.?, ¿cómo la expulsión, por la fuerza, de su país; el aplastamiento planificado por las grandes potencias imperialistas, en función de sus intereses estratégico-militares, del pueblo palestino con sus 2 millones y medio de personas refugiadas?

Ciertamente tenemos que lamentar la muerte de víctimas inocentes en Munich, pero al mismo tiempo es necesario preguntarse ¿cuáles son las causas que llevaron a los guerrilleros palestinos a realizar la acción política de Munich a riesgo de su propia vida?.

Como el mismo comando guerrillero indicaba en su explicación del secuestro, Palestina está en guerra con Israel, (y no olvidemos que los deportistas no dejaban de ser ciudadanos de Israel).

Hagamos un poco de historia. Por resolución de la Asamblea General de la ONU en 1947, Palestina queda dividida en dos Estados: uno árabe (44 % de la superficie total y 2/3 de la población) y otro judío (56 % de la superficie y 1/3 de la población). A partir de Mayo del 48 la política sionista de Israel consiste en incordiar y provocar el éxodo de la población árabe. La evacuación de los árabes era el objetivo de la guerra del sionismo. Esto supuso el que en Junio de 1967, 2 millones ciento cincuenta mil árabes palestinos estuviesen fuera de su país contra su voluntad. La guerra

relámpago de los seis días en Junio del 67, provocó otro éxodo de 350.000. Estas personas se refugiaron en Jordania, Líbano y Siria, viviendo en campos de refugiados, en ciudades de lona. La ONU creó una oficina de socorro para atender a los refugiados palestinos, cuyas atenciones no llegan ni a la tercera parte de los mismos. Para los que llega, cada refugiado recibe al mes como medio de subsistencia diez kilos de harina, 500 grs. de arroz, 500 gr de legumbres, 500 gr. de azúcar, 500 grs. de aceite y un pedazo de jabón. Esta ración es aumentada en invierno: 500 grs. de legumbres secas, 500 grs. suplementarios de harina y un litro y medio de petróleo. Demasiado para morir se de hambre y demasiado poco para tener ganas de vivir.

Esta situación desarrolló la conciencia del pueblo palestino que se tradujo en la creación de organizaciones armadas y en una amplia tarea de concienciación política de los palestinos. Los sionistas querían que los refugiados se integraran en los países árabes que les acogieron. Los palestinos rechazaban la instalación definitiva en el país de acogida. Exigían el derecho a vivir en su propio país.

Así se forma en 1954 Al Fath, inspirándose en la lucha de liberación de otros países (China, Vietnam, Cuba, Argelia) y comienza la lucha armada del pueblo palestino por su tierra y su vida. Lucha que pronto se ve enfrentada con la represión de algunos de los países en los que están refugiados. Recordemos la operación desarrollada por Jordania en Septiembre del 70 contra los guerrilleros palestinos. Estos se han convertido en una amenaza para los gobiernos militaristas y feudales árabes, (no en balde son el fermento que está planteando la necesidad de la revolución de los países árabes). De esa represión de Septiembre del 70 en Jordania, surge la organización "Septiembre Negro" que ha dado el golpe de Munich.

El Estado de Israel ha nacido como respuesta a la persecución secular de Europa contra la nación hebrea. Ha experimentado en sus inicios y ha sabido defender una larga serie de experiencias comunitarias que hacían de él un estado potencialmente diverso de los otros de su zona.

Pero la política europea había descargado sobre el Medio Oriente árabe sus propios remordimientos de conciencia, e irreversiblemente Israel terminaba por hacer pagar el proceso de liberación de los hebreos con un proceso de expropiación y expulsión de los árabes.

El juego de bloques USA-URSS empuja por un lado a Israel a una presencia imperialista sin concesiones de paz y apuntala por otra parte a las clases dominantes que mantienen el equilibrio interno a través de colocarse el casco del nacionalismo y del enemigo externo.

La esperanza no está en los gobiernos, ni en los estados-guía mundiales, en los acuerdos de la cumbre sino en los militantes palestinos que construyen a través de la acción popular una nueva conciencia en la masa árabe; del encuentro de los guerrilleros palestinos con la minoría israelita que de siempre ha sostenido la tesis de la convivencia y la colaboración entre árabes y judíos. De ahí puede nacer la única solución impuesta desde la base contra la maniobra de los bloques que se disputan la influencia sobre el Mediterráneo.

Para cerrar el comentario en torno al acto de Munich, cabe preguntarse ¿Por qué la policía alemana disparó contra los guerrilleros, provocando al mismo tiempo la muerte de los ciudadanos israelitas? Desde luego hay muchos aspectos por aclarar sobre lo que pasó en el aeropuerto militar de Munich, pero lo que parece claro es que la policía alemana actuaba de acuerdo con el gobierno israelita. Hay que contrastar el "escándalo" ante la acción de los palestinos con el silencio con que esos mismos medios informativos han acogido la matanza premeditada llevada a

cabo por las "fuerzas del orden" alemanas.

Todo el "escándalo" y la hipocresía informativa a que hemos estado sometidos estos días sólo tienen por objeto el ocultar las verdaderas causas de los conflictos y el mentalizar a los ciudadanos en la aceptación pasiva de las situaciones de opresión sostenidas por la violencia del poder establecido.

La manipulación capitalista de los medios informativos ha conseguido insensibilizar a la opinión pública sobre el terrorismo cotidiano que el imperialismo americano realiza sobre Vietnam y el terrorismo israelita sobre la población civil árabe y palestina de Siria, Jordania, Líbano... y tantas formas de terrorismo "oficial". Esa es la violencia legal, que justifica siempre las formas más refinadas de genocidio, las técnicas más crueles de tortura. Esos mismos medios informativos pretenden conmover la conciencia pública hasta su raíz, falseando los hechos de Munich. No y mil veces no. La policía, el Gobierno alemán e israelí son los asesinos de atletas y guerrilleros en Munich.

Por último vamos a ver algo, muy poco, sobre el terrorismo sionista.

A los pocos días de la matanza indiscriminada de atletas y guerrilleros en Munich, Israel pasaba factura sangrienta al pueblo palestino. Hasta la fecha más de 200 personas asesinadas por el ejército israelí, mayoritariamente ancianos, mujeres y niños, que mueren más que viven en los campos de refugiados de Siria y Líbano. La ley del talión judía a escala 1 por 200.

El aparato internacional de información capitalista ha comentado el hecho con un cinismo increíble: "Qué lástima, Israel va a perder puntos con esta reacción un tanto excesiva. Con lo bien que se podía explotar lo de Munich para la causa sionista ante la opinión internacional, y lo han estropeado bastante".

Esas últimas 200 víctimas no son una novedad, es lo rutinario. La historia del Estado de Israel va li

gada al intento de exterminar al pueblo palestino por el terror. Las organizaciones terroristas judías Ir-gún, Stern y Haganach nacieron con el Estado sionista y por citar algunas de sus actividades basta recordar el asesinato de un mediador de la ONU, de un embajador de España en Jerusalén y la matanza de Deir Yassin donde fueron pasados a cuchillo 250 palestinos, mujeres y niños en su totalidad.

El ejército israelita se encarga, sin interrupción, de expulsar al desierto a miles de palestinos. Mujeres, ancianos y niños es el grueso de estas deportaciones.

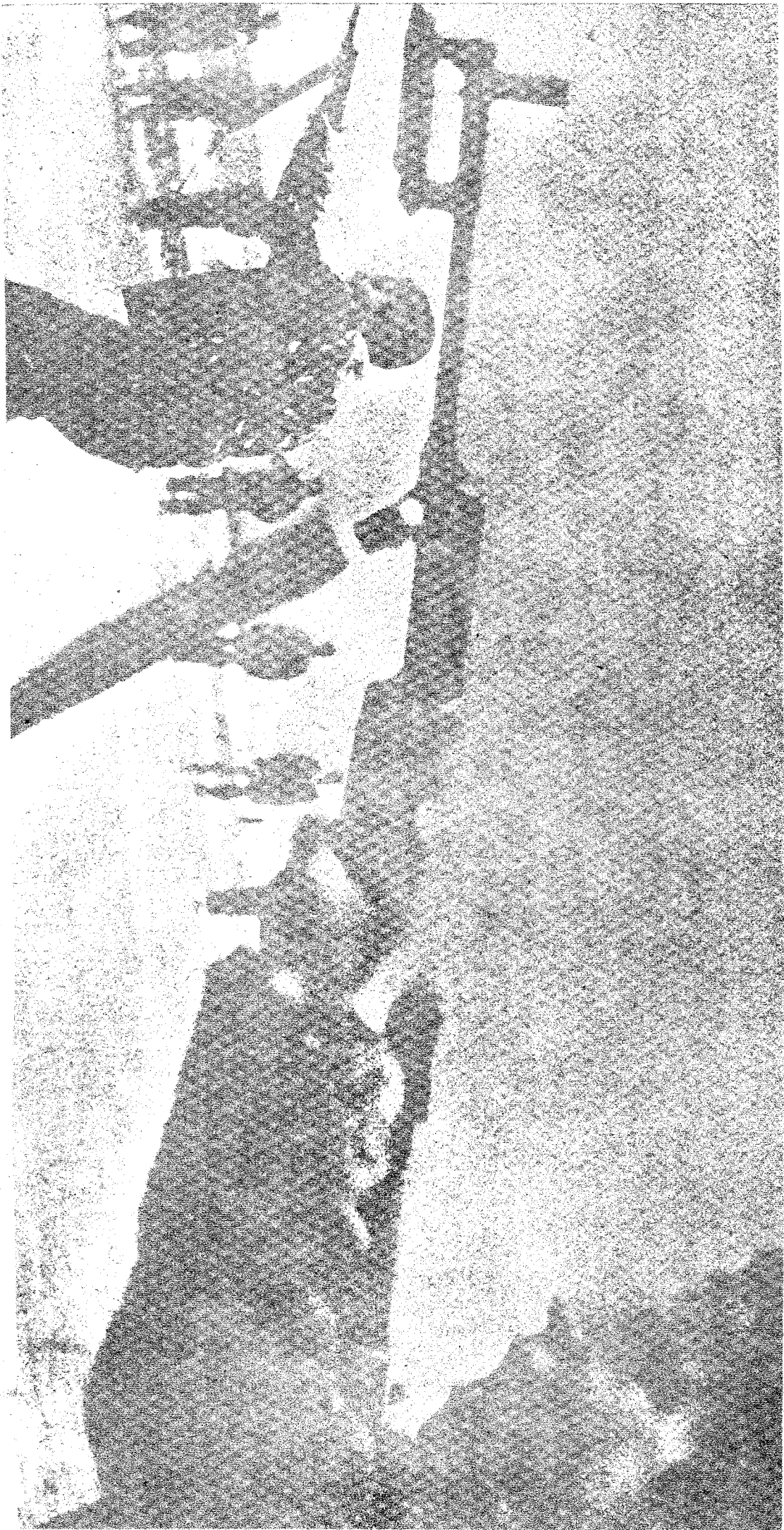
Ese mismo ejército lleva una práctica cotidiana de destrucción contra casas, emplazamientos y aldeas enteras de refugiados. Incluso algunos tribunales israelitas denunciaron el exterminio físico y humano de las aldeas cristianas de Ikrit y Kufur-Barran.

Los bombardeos con napalm sobre campamentos palestinos y árabes en los países fronterizos a Israel, es otra práctica casi diaria del ejército sionista.

El servicio secreto y la policía de Israel han hecho del secuestro y la tortura una forma corriente de actuación. Los guerrilleros y simpatizantes de la causa palestina son sus víctimas; se cuentan por cientos y de ello dan cuenta las cárceles, los campos de prisioneros y las salas de tortura judías. Hace unos meses varios oficiales sionistas secuestraron en territorio libanés a varios soldados de Líbano y Siria.

Así podríamos hacer interminable la relación del terrorismo sionista. El Estado de Israel ha violado todos los principios del derecho internacional; no conforme con el destierro palestino, pretende el genocidio de ese pueblo; no ha aceptado nunca las resoluciones de la ONU.

Esa política militarista contra árabes y palestinos sólo es posible con el aval imperialista de los EEUU. Israel es su sucursal en el Oriente Medio, como Portugal lo es en África y los gobiernos fascistas en Iberoamérica, por citar algunos.



DECLARACION DE "EL ARRAYAN" NUEVAS TAREAS PARA EL GOBIERNO POPULAR Y EL PUEBLO CHILENO

La dirección política de la Unidad Popular examinó los avances registrados desde el comienzo del Gobierno Popular, los problemas surgidos, las debilidades y errores en que se ha incurrido; las perspectivas próximas y de más largo alcance del proceso de transformaciones iniciado y las tareas que todo ello plantea al Gobierno, a las organizaciones políticas que integran la Unidad Popular y a los trabajadores y el pueblo chileno en general. Los debates se caracterizaron por la objetividad del análisis y por un espíritu franco y abierto a la crítica y autocrítica constructivas.

Sus conclusiones no se reservan a las organizaciones participantes. Por el contrario, de lo que se trata es de llevarlas a su discusión por las masas, para que sean ampliamente conocidas y se enriquezcan con nuevos aportes del pueblo, quien en definitiva tiene que tomar en sus manos muchas de las tareas que surgen como necesarias. De ahí que uno de los acuerdos, es que se organicen jornadas nacionales de discusión, en el seno de la Unidad Popular y directamente con los organismos de masas, que profundicen en el análisis crítico y autocrítico, y que incluso deriven en jornadas de planificación, en las que todo ese análisis se exprese en objetivos, metas, tareas concretas, a niveles regional, comunal, de centros productivos, de poblaciones, de barrios. En jornadas de esta índole corresponderá dar cuenta a funcionarios y dirigentes políticos de la Unidad Popular, y abordar cada tema que interese a los trabajadores de la ciudad, de las minas o del campo, a las capas medias, a profesionales y técnicos, a las mujeres y jóvenes, a fin de canalizar un conjunto de iniciativas y proposiciones en que queden señaladas las responsabilidades que asuman las propias organizaciones de masas y las que correspondan a la acción administrativa.

FORTALECIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD POPULAR Y SU PROYECCION EN LOS SECTORES POPULARES Y CAPAS MEDIAS.

El análisis efectuado puso de manifiesto, una vez más la concordancia de los partidos que integran la Unidad Popular, en torno a los objetivos programáticos centrales. Se reconoció sin embargo, que ese acuerdo básico no se traduce aún en una organización unitaria del trabajo práctico y en modalidades de acción conjunta que superen los marcos estrictamente partidarios. Ello se manifiesta en la ausencia de un trabajo político más profundo, en distorsión de esfuerzos o en conflictos menores, que debilitan la capacidad necesaria para impulsar el cumplimiento integral del programa.

De ahí se concluyó, como tarea urgente para la Unidad Popular el desarrollo de su capacidad organizativa y de movilización del pueblo y sustentación del Gobierno. Como primer paso para ello, se consideró necesario mantener en funcionamiento permanente una dirección eficiente y auténticamente colectiva a todos los niveles, desde el comité político nacional, al que debe dotarse de una adecuada estructura técnica, material y humana y reafirmamos el principio de la Unidad Popular de efectiva igualdad de derechos de todos los partidos integrantes. Lo mismo corresponde hacer en las escalas regional y local, organizándose a breve plazo asambleas locales de las que surjan luego asambleas regionales, para culminar en una Asamblea Nacional de la Unidad Popular.

Se entendió la urgencia de esas tareas de fortalecimiento interno como un paso esencial para asegurar la vinculación mayor con la clase obrera, los campesinos, los demás sectores populares y las capas medias. En efecto, se consideró que una de las mayores deficiencias de la política seguida hasta ahora ha sido la insuficiente incorporación de las masas a las tareas que el Gobierno Popular está llevando a cabo. Esa deficiencia se contrapone con el hecho de que para consolidar, desarrollar y profundizar el proceso revolucionario se requiere ganar el respaldo de la mayoría de los chilenos, lo que supone, no sólo, un trabajo de masas, sino la movilización activa de ellas, vinculándolas concretamente a todas las realizaciones del Gobierno.

La necesidad y posibilidad de lograrlo descansa en la naturaleza misma del programa de la Unidad Popular, que surgió de las luchas de la clase obrera y del pueblo, por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas y por sus derechos individuales y sociales y representa, objetivamente los intereses de la gran mayoría de la población chilena.

Esto no supone automáticamente el apoyo de todos los sectores beneficiados con las medidas de transformaciones sociales, puesto que hay prejuicios, apreciaciones subjetivas, penetración ideológica del enemigo, y errores de nuestra parte, que llevan a algunos de esos sectores a distanciarse o aún a colocarse en posiciones antagónicas, en contraposición a sus verdaderos intereses. La tarea es, por lo tanto, acercarlos al reconocimiento de la realidad objetiva y lograr su participación en un proceso de transformación revolucionaria que en definitiva les favorece.

LA LUCHA IDEOLÓGICA Y NUESTRA VOLUNTAD COMUN DE DESTERRAR EL SECTARISMO, EL BUROCRATISMO Y LA DESHONESTIDAD.

Es claro que esa tarea es incompatible con actitudes y procedimientos sectarios, cuya persistencia fue reconocida como otra deficiencia notoria que urge corregir. Ello se tradujo en dejar claramente registrada la voluntad común de dar la batalla, sin contemplaciones, contra el sectarismo, el burocratismo y sus diversas manifestaciones.

Nos proponemos desterrar el sectarismo que se expresa en las relaciones entre los partidos políticos de la Unidad Popular, que entorpece el trabajo común en la base y conduce a formas nocivas de competencia por el reclutamiento de militantes o a intentos de parcelación de sectores de la administración pública, empresas del área de propiedad social o esferas de influencia.

Igualmente, hemos decidido erradicar el sectarismo que se proyecta más allá de la unidad popular, que tiende a excluir la acción conjunta con trabajadores no militantes, o que militan en organizaciones ajenas a ella; a desconocer o a vulnerar derechos de funcionarios o trabajadores que, sin estar con nosotros, cumplen honestamente sus tareas; o a condicionar a la adhesión partidaria el reconocimiento de méritos individuales para tareas técnicas o de representación.

Se requiere al mismo tiempo terminar con el burocratismo que hemos recibido como herencia de los gobiernos anteriores, con la rutina de las tramitaciones innecesarias y agobiantes, con las actitudes de desinterés o negligencia hacia quienes recurren a un servicio público, con la despreocupación por la búsqueda de nuevos métodos o por las iniciativas creadoras que se propone. Hay que descubrir y denunciar a los elementos saboteadores que entran a los organismos administrativos y que, con su acción o lenidad, perjudican al pueblo. Los propios organismos de masas tienen que ayudar en esta tarea, forzando a la resolución de sus problemas, reclamando y denunciando las actitudes burocráticas. Por nuestra parte, la Unidad Popular se compromete a crear los mecanismos concretos para acoger los reclamos que se formulen por estos conceptos.

A todo ello contribuirá la decisión unánime de los partidos políticos de la Unidad Popular de revisar el desempeño de sus militantes destacados en cargos de dirección del Gobierno y realizar los cambios que se consideren necesarios, así como la reiteración de su criterio de eliminar las tendencias al cuoteo o parcelaciones, y de que cada funcionario actúe con responsabilidad jerárquica y bajo la dirección de los ministerios respectivos y del Presidente de la República.

Es igualmente común la decisión de imponer una nueva moral en el desempeño de las funciones públicas. Ello supone, en primer lugar, que se procederá a sancionar de manera ejemplar y con la mayor rapidez cualquiera manifestación de deshonestidad que pudiera detectarse. Para eso fin se espera contar con la colaboración de todos, a objeto de que se den a conocer los actos de tal naturaleza, y que instruirá a las autoridades administrativas de mayor jerarquía que establezcan procedimientos adecuados para recibir las denuncias del caso y comunicar sus resultados. Se cuidará, además, que quienes ejerzan cargos ejecutivos en el aparato administrativo y en las empresas del área social o intervenidas, mantengan escrupulosamente un estilo de modestia y sobriedad.

El cumplimiento de estas metas básicas, así como de las demás señaladas en este documento sería una utopía sino somos capaces de librar una dura batalla ideológica en el seno de las masas, que lleve a la comprensión integral del proceso revolucionario que estamos viviendo. Y en esto reconocemos que hemos sido remisos.

La reacción y el imperialismo han estado señalando permanentemente la tónica de la discusión y realzando las cuestiones que a ellos les interesan. La Unidad Popular no ha centrado el debate en los valores auténticos de este proceso. Hoy, por ejemplo, parece más importante el problema del abastecimiento, común a todos los gobiernos -que antes golpeaba con más fuerza a los más humildes y que es propio de una estructura económica insuficiente- que la nacionalización del cobre, del hierro o del acero, que sientan efectivas bases económicas para nuestro real desarrollo.

El pueblo no siempre adquiere conciencia de que esta batalla ideológica es el enfrentamiento entre quienes defienden la mantención de un estado de cosas y nunca los favoreció y quienes buscan el progreso de la mayoría y la abolición de los privilegios, entre quienes siguen amparando las pretensiones imperialistas y quienes buscan una patria soberana e independiente.

A esta lucha diaria, la Unidad Popular habrá de darle una máxima prioridad.

EN 1971 SE REGISTRARON AVANCES DECISIVOS
EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

Las proposiciones concretas que hacemos han sido el fruto del análisis objetivo de las deficiencias observadas y de la intención decidida de superarlas. Pero, esta superación no sólo debe entenderse como una cuestión administrativa, sino que debe lograrse, profundizando la participación y el poder

real del pueblo.

Es un hecho que en 1971 se dieron pasos decisivos en el cumplimiento del Programa del Gobierno Popular. Se adelantaron cambios estructurales de fondo, que configuran el inicio de la transformación socialista de la economía chilena; se lograron una reactivación y un crecimiento económico con una intensidad que tiene pocos precedentes históricos; se disminuyó notablemente la cesantía; se redistribuyó el ingreso y se aumentó la capacidad de compra y los niveles de consumo de los trabajadores.

El pueblo debe saber, por ejemplo, que en 1971 se obtuvieron grandes éxitos en la Batalla por la Producción. En el Año de la Nacionalización del cobre, Chile produjo 730 mil toneladas, incluyendo la grande, mediana y pequeña minería; esto representa 40 mil toneladas más que en 1970. Se produjeron, asimismo, 615 mil toneladas de acero. En la producción de cemento se llegó a un millón trescientas mil toneladas. La producción de electricidad llegó a cinco mil setecientos noventa millones de Kw./H, que significa un aumento del 16 %. La refinación de petróleo llegó a cinco millones seiscientos mil metros cúbicos, gracias al aumento de la capacidad de la refinaria de Concepción. Todas estas son cifras nunca alcanzadas antes en el país. Además, la producción de carbón alcanzó a un millón y medio de toneladas, o sea, un 10 % más, iniciándose así la recuperación de esta actividad. La producción de salitre pasó de 674 mil toneladas en 1970 a 830 mil en 1971.

Grandes éxitos se han logrado también en el frente social. Entre el Ministerio de la Vivienda, la CORA, el SINAP y otras entidades, se inició en 1971 la construcción de alrededor de 100 mil viviendas, cifra sin precedentes, que significará solucionar los problemas habitacionales a más de 500 mil personas. La expansión de la educación también fué más alta que se conoce; la enseñanza media técnico-profesional aumentó en 38 % su matrícula; la enseñanza universitaria se expandió en un 28 %; la escolarización en la enseñanza básica fué de un 98 % en el tramo de 6 a 14 años. En 1972, entre las escuelas técnico-profesionales medias y las universidades se dará educación a 250 mil jóvenes. Por otra parte, el tradicional drenaje de profesionales chilenos ha disminuído a menos de un tercio y son muchos los que han regresado al comprobar la existencia de grandes tareas en su patria. Esta es la respuesta frente a un esfuerzo de desarrollo y a la salida del país de algunos profesionales reaccionarios.

Los éxitos anteriores han significado dar ocupación a 200 mil nuevos trabajadores. Hoy día tienen empleo remunerado 3.140.000 chilenos. Nunca antes un Gobierno pudo mostrar en su primer año estas realizaciones.

Ya tenemos bajo el control de la sociedad sectores fundamentales que estaban en manos de intereses imperialistas o grupos monopólicos: el cobre, el hierro, el salitre, el carbón, la siderurgia, casi todo el sistema bancario, grandes empresas del cemento y otras de materiales de construcción, textiles, pesqueras. Se expropiaron 1.378 latifundios, con casi dos millones setecientas mil hectáreas, lo que equivale a todo lo que el gobierno anterior hizo en seis años. Los sectores no reformados de la agricultura recibieron una asistencia del 58 % superior.

Simultáneamente, se alcanzó un crecimiento del producto nacional cercano al 9 % y un aumento de la producción industrial del orden del 13 %. La tasa de desocupación disminuyó del 8,3 % al 3,8 %. El ingreso real se elevó un 20 % y el nivel de consumo de los asalariados aumentó un 13 %, con lo cual los obreros y empleados pasaron a controlar el 60 % de la renta nacional contra un 51 % anterior. Los aumentos de precios fueron sustancialmente menores a los de 1970.

No obstante su magnitud e importancia, estas realizaciones aparecen oscurecidas por la campaña publicitaria de la reacción y el esfuerzo insuficiente

te de la Unidad Popular para contrarrestarla y denunciar su intencionalidad. Se ha perdido de vista la perspectiva de que los frutos de muchas de las acciones de este Gobierno deben medirse sobre todo por su significación liberadora y porque crean bases objetivas para un ulterior desarrollo.

Era indispensable liberar al país de la dominación imperialista, rescatando nuestros recursos básicos; liberar la capacidad de nuestra tierra, desperdiciada por el latifundio; liberar la industria y otros importantes instrumentos del control del dominio monopólico. En esas tareas se dieron pasos trascendentales en 1971, sin perjuicio de que quedan todavía otras similares muy importantes por cumplir. Entre tanto, a cada tarea liberadora tienen que seguir necesariamente tareas de construcción revolucionaria, las que han quedado apenas iniciadas en 1971. De ahí que los avances que se registran hasta ahora representan sólo una fracción de la potencialidad abierta por lo que se ha hecho hasta la fecha.

SE HA DEBILITADO EL PODER DE LOS GRANDES MONOPOLIOS;
PERO LA REACCION CONSERVA BASES IMPORTANTES
DE SUSTENTACION Y AUMENTA SU AGRESIVIDAD.

Cada paso que se avanza en el Programa debilita el poder de la reacción pero, al mismo tiempo la hace más agresiva. Además esa agresividad se apoya en la conservación de importantes fuentes de poder económico, en el retraso en afectar algunos grandes monopolios, en las fallas o debilidades que les han preservado el acceso a cuantiosos recursos financieros, y en la presión que las empresas extranjeras expropiadas ejercen contra nuestro país.

En este sentido, hay diferencias importantes en el cuadro político en el que se enmarca la acción y la línea económica del Gobierno Popular, entre la situación a comienzos de 1971 y al inicio de 1972. Al inaugurarse este Gobierno, los sectores más reaccionarios estuvieron a la defensiva y esperanzados en que se debilitara la voluntad de cumplir integralmente el programa, de que se perdiera el carácter revolucionario del proceso y se transformaría en puramente reformista y no fuera más allá de reforzar un capitalismo de Estado, que antes supieron muy bien aprovechar en su beneficio.

Hoy día, se han disipado esas esperanzas de la reacción y actúa en consecuencia, incluso estimulando acciones sediciosas con el sólo propósito de hacer fracasar a cualquier precio la política económica del Gobierno Popular. Se comprueba también que la agresividad reaccionaria no proviene solo de la desesperación por los avances en el cumplimiento del Programa. En estos sectores, y en parte de las fuerzas políticas que los representan, hay quienes temen no sólo a los cambios, sino a la investigación de los delitos y fraudes que el Gobierno Popular ha comenzado a poner de manifiesto y a encauzar a través de los canales judiciales y administrativos correspondientes.

La Derecha, en su conjunto, hace lo posible por trasladar la imagen de poder hacia los centros que controla, en especial el Parlamento. Prueba de ello son su afán de cercenar los presupuestos de desarrollo del país y de sectores administrativos a los que lanzan a la cesantía (paro), su tozudez para violar la Constitución con interpretaciones mal intencionadas -felizmente impedidas por el Tribunal Constitucional- o su deseo de limitar las prerrogativas presidenciales con acusaciones a Ministros, que constituyen verdaderas aberraciones políticas.

La oposición al Gobierno se desliza, a veces, a convertirse en una especie de oposición a los intereses del país. Y hay quienes llegan más allá y desarrollan actividades y preparativos sediciosos.

HA CAMBIADO EL CARACTER DE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS Y LA NATURALEZA DE LAS RESTRICCIONES.

Así como son distintas las circunstancias políticas, son también diferentes el carácter de los problemas económicos y la naturaleza de las restricciones que se tienen ahora, en comparación a las que se dieron en 1971.

La política económica puesta en práctica a comienzos de ese año se tuvo que apoyar en gran parte en las aberraciones del sistema anterior. A partir de una economía deprimida y estancada se adoptaron medidas de reactivación, en parte, mediante programas específicos y sobre todo impulsando una rápida redistribución del ingreso que aumentó sustancialmente la demanda y la capacidad de compra de los trabajadores. La disponibilidad de amplios márgenes de capacidades ociosas representaba un factor que facilitaba aumentos rápidos de la producción y permitía a las empresas disminuir sus costos por unidades. Se daban así condiciones propicias para lograr simultáneamente aumentos de producción y de consumo, disminución de la cesantía y una tasa de inflación sustancialmente más baja que la del año anterior. Se anticipaba, también, una situación relativamente holgada de comercio exterior, que facilitaría salvar algunos desajustes entre la mayor demanda y la respuesta de la producción. Por último el objetivo de rápida reactivación exigía la expansión del gasto público, bajo condiciones de un financiamiento necesariamente deficitario. Sin embargo, sus efectos potencialmente inflacionistas podían compensarse con la mayor producción y las posibilidades de regular la expansión monetaria en el resto del sistema financiero.

Los lineamientos básicos de ese esquema se cumplieron con aproximación razonable en el curso de 1971. Hubo sin embargo algunas deficiencias. Los reajustos de remuneraciones excedieron los términos previstos. El no pago de los dividendos adeudados por las compañías de cobre, la reducción con cierre de líneas de crédito en el exterior, y la fuerte caída en los precios del cobre, obligaron a utilizar reservas para seguir pagando deudas anteriores, en tanto, que las importaciones aumentaron en un 9,6 % en comparación con 1970. Esos factores motivaron, además, la insuficiencia de abastecimientos de algunos productos, si bien en general a niveles de consumo apreciablemente mayores que los del año anterior. Recibimos el país, por ejemplo, con la misma cantidad de ganado vacuno que existía en 1936, no obstante que la población se duplicó en ese lapso. Un proceso de cambios como el iniciado no puede solucionar de golpe todos los defectos de una estructura atrasada. A la magnitud de esos y otros problemas, se agrega la herencia de un aparato estatal conformado y con rutinas de funcionamiento para servir a los grandes intereses capitalistas. Es de notar, al respecto, el escaso control estatal sobre los mecanismos mayoristas de distribución.

Distinto es el punto de partida para 1972, con unos rasgos más positivos; pero también algunos más adversos.

Los efectos de una política indiscriminada de endeudamiento externosostenida desde hace muchos años y que deja una acumulación particularmente gran de compromisos para éste y los dos años próximos, plantean serias restricciones desde el punto de vista del balance de pagos. La propia reactivación económica ha llevado a grados altos de utilización de la capacidad productiva, lo que impone limitaciones reales a nuevas expansiones del consumo y plantea, como necesidad urgente, aumentar las inversiones. La fuerte acumulación de liquidez en el sistema resta flexibilidad a la política financiera y hace indispensable un manejo más estricto y selectivo.

En cambio, los progresos en la conformación del área de propiedad social aportan instrumentos de conducción y control que no se tenían al inicio de 1971, además de la experiencia ganada en estos meses. Se parte ahora con un

sistema productivo en pleno funcionamiento, que no requiere los esfuerzos de reactivación que absorvieron la preocupación en los primeros meses del año pasado. Bastaría que se mantuvieran los niveles de actividad a que se llegó en el segundo semestre de 1971, para alcanzar un aumento significativo de la producción industrial. También han venido concretándose en los últimos meses, iniciativas y proyectos que traducen la voluntad de contribuir con asistencia técnica, colaboración económica y desarrollo del comercio con el Gobierno Popular de Chile, por parte de muchos países, principalmente del mundo socialista.

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES PARA 1972.

PROFUNDIZAR EL PROCESO CON LA INCORPORACION REAL Y MASIVA DE LOS TRABAJADORES A TODOS LOS NIVELES DE DECISION, COMPLETAR LO ESENCIAL DEL AREA DE PROPIEDAD SOCIAL, AFIANZAR EL MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES, SENTAR BASES MAS FIRMES PARA EL DESARROLLO FUTURO.

Se han valorado en el curso de la reunión los nuevos problemas que se enfrentan, como también los factores positivos y la mayor capacidad para superarlos. La Unidad Popular expresa claramente el criterio de que la respuesta frente a las restricciones previsibles no está en detenerse, sino, por el contrario, en profundizar y desarrollar con más rapidez el cumplimiento integral del Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular.

A partir de esa decisión se definen los objetivos principales de la política para 1972: completar rápidamente lo esencial del área de propiedad social, afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, y sentar bases más firmes para el desarrollo futuro, todo lo cual exige, en primer término, profundizar el proceso con la incorporación real y masiva de los trabajadores a todos los niveles de decisión.

La burguesía monopólica conserva todavía importantes fuentes de poder, desde las cuales despliegan sus acciones de sabotaje y obstrucción, procura corromper a determinados grupos de trabajadores e incluso financia la preparación sediciosa. Otro tanto ocurre con quienes mantienen su propiedad latifundaria. La necesidad de una política económica más selectiva y discriminatoria, con mayor capacidad para captar excedentes y canalizarlos hacia las actividades prioritarias, plantea también, como requerimiento esencial, extender el control social a empresas que mantienen dominio monopólico sobre actividades importantes desde el punto de vista del abastecimiento inmediato y desarrollo futuro.

Todo ello justifica la decisión que ahora se reitera de avanzar rápidamente a fin de completar, en los próximos meses, los cambios institucionales comprometidos en el Programa. En la agricultura, ello significa realizar la expropiación de todos los predios mayores de ochenta hectáreas de riego básicas, del modo más rápido posible. Esto representa unos dos mil predios, a lo que hay que agregar cierto número adicional que son ofrecidos voluntariamente por sus propietarios o que están abandonados. Se emprenderá esta acción en estrecho contacto con los campesinos y sus organizaciones, especialmente a través de sus Consejos Comunales y Provinciales; y se la enmarcará, como hasta ahora en la legislación vigente, no obstante las imperfecciones de la ley y los muchos problemas que plantean los campesinos con respecto a las limitaciones. Y sin perjuicio del nuevo proyecto que el Gobierno presentará al Congreso, respecto de la asignación de la tierra, ella se ajustará a la voluntad de los campesinos.

Reafirmamos nuestra política contraria a las tomas indiscriminadas de predios, que dificultan el proceso de la Reforma Agraria y no resuelven los

problemas de los campesinos.

En el caso del sector industrial reiteramos la decisión de que se incorporen al área social o mixta las empresas cuya lista fue dada a conocer públicamente por el Presidente de la República, sobre la base de una movilización efectiva de sus trabajadores.

El objetivo de afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, se expresa concretamente en diversos planos. Está, en primer lugar, la política de remuneraciones, cuyos términos esenciales quedaron definidos en el Acta CUT-Gobierno. Respecto de ella, cabe señalar que supone una nueva redistribución del ingreso en favor de los trabajadores. En razón de las limitaciones reales del sistema económico, que excede aquellos términos, no representaría mejoramientos adicionales efectivos para los trabajadores. El mismo objetivo de elevar las condiciones de vida se logra, también, por otros mecanismos importantes, distintos de la remuneración individual: la construcción de viviendas, la extensión de la educación, la formación profesional, el mayor acceso de los trabajadores a los medios de descanso y recreación y, también, los esfuerzos para mejorar el abastecimiento y la distribución en los barrios populares, así como la lucha contra la especulación, con la participación activa de la propia población, a través de las Juntas de Abastecimientos y Precios.

Por último, la política económica no se limitará a cumplir objetivos inmediatos, sino también a fortalecer la capacidad para asegurar la continuidad de un crecimiento sostenido y para superar definitivamente algunas limitaciones heredadas.

LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA PARA 1972

A partir de esos objetivos y teniendo en cuenta las restricciones señaladas, se definen las políticas parciales que conforman el cuadro general de la política económica para 1972.

Su carácter más complejo hace necesario un gran esfuerzo orgánico para su aplicación en los distintos niveles. A este respecto, se reconoció en el análisis efectuado por la dirección política de la Unidad Popular, la necesidad urgente de corregir una de las deficiencias no superadas en el curso de 1971, cual es la de asegurar una dirección económica centralizada, que de unidad al conjunto de la política económica mediante orientaciones precisas, controle su ejecución y asuma directamente la responsabilidad de decisiones sobre cuestiones de cierta envergadura, contando con la asesoría de los organismos de planificación. La reciente reorganización del Comité Económico de Ministros y la designación dentro de éste de un Secretariado Ejecutivo, integrado por los Ministros de Economía y Hacienda y por el Asesor Económico del Presidente, facilitará ese propósito; pero, el esfuerzo orgánico debe extenderse también a otros niveles y particularmente a los de dirección intermedia, asegurando, además la presencia en ellos de representantes directos de los trabajadores. Las propias organizaciones políticas integrantes de la Unidad Popular asumen el compromiso de respaldar activamente la aplicación de la política económica, y de contribuir a que ésta se transforme efectivamente en una política de masas.

Se necesita para el área social de la economía una dirección eficiente una organización racional, un desarrollo planificado armónico y riguroso, una consideración de dicho plan desde la base y una administración que abra paso a la participación responsable de todos los estamentos de los trabajadores en todos los niveles y asegure mayores oportunidades a los técnicos que laboran en ella. Las empresas del área social, trabajando planificadamente, deben alcanzar niveles óptimos de productividad y rentabilidad.

Los avances logrados en 1971 en relación al control del sistema financie

ro bancario deben perfeccionarse en 1972 con la organización de una estructura bancaria que sirva los intereses de la nueva economía, superando el burocratismo y apoyando a los grupos sociales y a los sectores claves para el desarrollo económico. 1971 fué el año de la estatización bancaria, 1972 será el año de la aplicación de la banca a las necesidades del desarrollo y al servicio del pueblo.

Las restricciones previsibles de la balanza de pagos asignan especial importancia a la política de Comercio Exterior. La creación reciente del Comité de Comercio Exterior contribuirá a superar los problemas e ineficiencias que derivan de la multiplicidad de organismos y a poner en práctica una política más coherente y homogénea. La renegociación de la deuda exterior, impuesta por el peso agobiante del endeudamiento acumulado liberará una parte sustancial de los compromisos, que de otro modo, reduciría nuestra capacidad para importar a cifras incompatibles con los objetivos propuestos. Se acelerará, al mismo tiempo, la utilización de las fuentes de recursos externos que han venido abriendo, especialmente desde los países socialistas. Se seguirá una política selectiva de importaciones, a través de un riguroso presupuesto de divisas, de modo que se asegure el abastecimiento de los productos esenciales de consumo, de las materias primas para el pleno funcionamiento de la economía, de los repuestos, de las maquinarias necesarias y de los equipos industriales para el desarrollo.

En las exportaciones el aspecto decisivo a corto plazo sigue siendo el cobre, sin perjuicio de que se estimulen y apoyen también otros rubros. En ese sentido se planteará como tarea nacional, después de analizarla en conjunto con los trabajadores del cobre, una meta que signifique aumentos significativos de la producción en comparación con la de 1971.

La política de producción y distribución se vinculará directamente al objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. A esos efectos, se definirá una "canasta de consumo popular", que precise un conjunto de bienes y servicios a los que se asignará primera prioridad para aumentar la producción, asegurar el complemento necesario de las importaciones y concretar un programa de inversiones que amplíe la capacidad de producción de las industrias alimentarias, textil y otras, que suministran bienes de consumo popular. Forman también parte de esa canasta servicios esenciales, como la locomoción colectiva, cuyo mejoramiento constituye una tarea importante dentro del esfuerzo que se concretará en 1972. En el caso de la agricultura, se planteará a los campesinos el objetivo de incrementar en unas 200 mil hectáreas la superficie que tradicionalmente se cultiva en el país, sobre la base de incorporar praderas naturales que no son aprovechadas porque no hay ganado suficiente para ello. Se han tomado ya medidas para que, en los primeros meses del año, se importan desde países socialistas varios miles de tractores, lo que constituirá un mejoramiento importante en la disponibilidad de maquinarias para cultivos. Al mismo tiempo, se proyecta aumentar de modo significativo las colocaciones de los fertilizantes y otros elementos de producción que son básicos para alcanzar esos resultados. En materia de producción animal, está en marcha un programa que significará aumentar la producción avícola en unas 30 mil toneladas, 60 % más que en 1971, otros relacionados con la producción de carne de cerdo y leche, y el destinado a duplicar la de pescado, a fin de mejorar la alimentación del pueblo.

Se adelanta, al mismo tiempo, un conjunto de medidas para mejorar los sistemas de comercialización y distribución, que incluyen el fortalecimiento de los mecanismos estatales que están desplazando intermediarios mayoristas innecesarios y abriendo contacto directo con los comerciantes minoristas.

La política presupuestaria deberá conciliar una limitación del financiamiento deficitario con la ampliación de los servicios sociales, como vivienda, educación, salud pública. Las nuevas inversiones del área de propiedad social deberán apoyarse, en lo fundamental, en la creación de sus propios excedentes y de una utilización conveniente de la política crediticia. La disminución de

La cantidad excesiva de dinero en manos de los sectores privados, y sobre todo de grandes empresas monopolistas, es otra tarea importante, que se enfrentará mediante algunas medidas específicas y las disposiciones generales sobre normas de crédito próximas a acordarse por el Banco Central.

La política de precios no puede dejar de tener en cuenta la incidencia sobre los costos de los reajustes de remuneraciones y las modificaciones acordadas para el tipo de cambio. A ello se agregan los aumentos de precios de productos agropocuarios que se otorgan para mejorar el ingreso real de los campesinos, así como los aumentos de precios del mercado mundial y la necesidad de ir conformando una estructura más racional de precios relativos. Sin desconocer esas exigencias, se tendrán en cuenta criterios selectivos que discriminan en lo posible, según el tipo de productos y los niveles de ingreso de sus consumidores. En todo caso, se sostendrá decididamente la defensa del poder de compra de los trabajadores, como ha quedado demostrado al proponer el bono de compensación por las alzas inevitables de algunos productos básicos.

SE PONDRÁ EN MARCHA UN VASTO PROGRAMA DE INVERSIONES Y DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNICOS DISPONIBLES.

A ese conjunto de medidas de política económica se agrega la puesta en marcha de un vasto programa de inversiones, como respuesta a la necesidad del proceso de acumulación, que caracterizará el esfuerzo de 1972 en medida mucho mayor de lo que ocurrió en 1971.

A este respecto, hay que tener en cuenta que los planes de desarrollo del Gobierno Popular implican cambios en la estrategia de desarrollo, que dan más importancia a la inversión productiva y dentro de ella a la que se destine a producir bienes de consumo popular y aumentar el empleo. En contraposición a esa orientación la carpeta de proyectos heredada obedecía a finalidades diferentes, lo que hace necesario un esfuerzo especial para diseñar un programa equilibrado que combine inversiones destinadas a resolver el abastecimiento popular y a desarrollar industrias básicas (acero, petróleo, electricidad). La maquinaria estatal de inversiones está desarticulada, utiliza criterios tradicionales para formular y evaluar proyectos, realiza largos estudios de prefactibilidad y demora años en decidir. Es indispensable modificar esos viejos criterios y crear un sistema racional de formulación de proyectos de inversión. En apoyo a ese nuevo aparato de inversiones, se estudia la creación de un sistema nacional de Ingeniería destinado a racionalizar el desempeño de los ingenieros y técnicos nacionales, armonizar sus esfuerzos con la asistencia técnica extranjera y, en definitiva favorecer que los ingenieros chilenos se desplacen de tareas burocráticas a labores de diseño y puesta en marcha de proyectos de desarrollo.

Esta orientación supone, también, descentralizar la inversión de modo que se invierta más en las regiones donde están ubicados los recursos y se localicen industrias en las provincias. Se requiere incrementar los caminos de penetración, a fin de que los campesinos, pequeños y medianos productores puedan sacar su producción; construir silos, frigoríficos y una infraestructura integrada de almacenamiento, destinada a evitar pérdidas de producción; y asegurar poder comprador y transportes, dentro de un sistema nacional de abastecimiento.

De ahí que una parte importante del programa de inversiones corresponda a un conjunto de inversiones complementarias, vinculadas directamente a la canasta de bienes de consumo popular, en industrias alimentarias textiles y de materiales de construcción. Entre otros proyectos de esa naturaleza, está el de la planta de IANSA en Curicó; el de impulso a la industria pesquera, que muestra ya sus primeros resultados; el de desarrollo de la industria avícola, con inversiones en marcha en pabellones de engorde, reproductoras, incubadoras, fábricas de alimentos, mataderos y frigoríficos; ampliaciones y mejoras en las

instalaciones textiles, ampliaciones y remodelaciones de las plantas de cemento y construcción de una nueva Antofagasta, así como plantas de prefabricados de hormigón.

Otros proyectos contribuirían a fortalecer nuestra capacidad exportadora. Están las inversiones adicionales que requiere el cobre; en la minería del hierro la expansión de Romeral y Algarrobo, que con la entrada en producción de Boquerón Chañar elevarán nuestra producción dentro de algunos años a 15 millones de toneladas anuales y el impulso a los proyectos de peletización, que permitan explotar en el futuro yacimientos de baja ley; los proyectos estudiados para recuperar en Chile el renio, el molibdeno y el vanadio; los proyectos en el sector forestal de la madera y la celulosa, así como en el sector químico y petroquímico. El acuerdo reciente con la firma española FEMSA sobre sociedad mixta con mayoría CORFO nos abre la exportación de productos eléctricos automotrices con un monto inicial de 10 millones de dolares anuales, lo que demuestra la enorme potencialidad que tiene el desarrollo de industrias elaboradoras de cobre para su exportación industrializada.

Otros proyectos de inversión se orientan a fortalecer la infraestructura básica, tanto de medios de transporte, como de suministros de energía. La expansión ya en marcha de la planta de Huachipato llevará la capacidad de producción de acero a un millón de toneladas anuales en 1974, superando las restricciones de este suministro básico que ahora se enfrentan.

En la ejecución de este programa de inversiones tiene importancia especial la contribución de los países socialistas. Las negociaciones efectuadas durante el año pasado pusieron de manifiesto la posibilidad de concretar unos 130 proyectos, posibilidad que comienza ahora a traducirse en acciones específicas.

LA POLITICA HACIA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS.

En las tareas que se anuncian, la dirección política de la Unidad Popular reconoce un lugar legítimo de permanencia y desarrollo a las amplias capas de pequeños y medianos empresarios.

Se ha reiterado una y otra vez que el Programa no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopólico, cuyas contradicciones efectivas se han dado históricamente y siguen dándose con las grandes empresas monopólicas de la producción y la distribución. Sin embargo esas bases objetivas no han llevado hasta ahora a un entendimiento generalizado y a formas de trabajo conjunto sistemático entre los organismos administrativos de Gobierno y las organizaciones gremiales representativas de esos empresarios. Ha sido más fuerte la penetración ideológica de la reacción, que ha arrastrado a algunas de estas últimas, por encima de sus verdaderos intereses a solidarizar con la gran burguesía monopólica y sumarse a un heterogéneo Frente Nacional del Area Privada.

No obstante se han dado pasos significativos para favorecer ese entendimiento y se reitera la voluntad de profundizarlos. El Estatuto de la pequeña industria y la Artesanía, suscrito con la AMPICH, incorpora viejas aspiraciones de esos sectores, les da garantías y establece diversas formas positivas de apoyo y fomento, mediante disposiciones que deben ponerse en marcha con la mayor rapidez posible. La definición explícita del ámbito de las áreas social y mixta, mediante la publicación de la lista de empresas que deben incorporarse a ellas de conformidad con los lineamientos básicos del Programa, disipa toda campaña de incertidumbre que ha sido hábilmente alimentada por la prensa reaccionaria. Se reitera, también, la disposición a suscribir con el comercio detallista un estatuto similar a lo acordado con la pequeña industria. Más allá de las garantías, están igualmente abiertas las posibilidades de una amplia y permanente participación de los pequeños y medianos empresarios, a través de los canales que les permitan expresar sus problemas, iniciativas y sugo

tenencias y reconocer, oportunamente, sus requerimientos para asegurarse el abastecimiento de materias primas, equipos y créditos. Se ha adelantado en esa dirección al reestructurar el Consejo Nacional de Desarrollo, invitando a la representación de AMPICH y CONPIA en sustitución de organismos que, como la sociedad de Formento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio, responden en los hechos a los grandes intereses monopolísticos. Es necesario complementar esa participación extendiéndola a los demás niveles, como los comités sectoriales de la CORFO, el Servicio de Cooperación Técnica y otros similares.

Igual ocurre con los pequeños y medianos agricultores, sector que representa cerca del 40 % de la población agraria del país. Para ellos, las líneas fundamentales de la política del Gobierno Popular se reiteran asegurando la inexpropiabilidad de sus predios; la rápida extensión de los beneficios del sistema previsional que el Gobierno les ha otorgado a través de la legislación; el fomento del sistema cooperativo, con asignación de tierras a aquellas cooperativas que no estén en condiciones de producir suficientemente con los recursos de tierras que ahora tienen en sus manos; y con la ampliación de las líneas de crédito, tanto de producción como de capitalización y asistencia técnica, de acuerdo a las condiciones de las distintas regiones del país y dando especial atención a los créditos de fomento ganadero. Se redoblarán, asimismo, los esfuerzos para resolver los problemas de la población indígena, que por generaciones venía siendo menos cabada en sus derechos y su dignidad y de la cual el medio millón de personas que la constituye estaba reducido a una condición de miseria y explotación. De ahí el empeño del Gobierno Popular para acelerar el proceso de recuperación de las tierras usurpadas a las comunidades mapuches e incrementar significativamente los recursos educacionales destinados a ellas. Esta labor ha culminado con la proposición al Parlamento de una nueva legislación indígena elaborada con plena participación de esa población y que tiende a corregir la condición de ciudadanos de segunda categoría en que han vivido hasta ahora. La mayoría reaccionaria del Senado está tratando de desnaturalizar ese proyecto.

Al delinear los rasgos generales de la acción que se emprenderá en el curso de este año, se reafirma la decisión política de profundizar el carácter del proceso iniciado por el Gobierno Popular, que conduce rectamente a la construcción del socialismo. Ello supone completar de manera rápida la formación del área de propiedad social, materializar a partir de ella las nuevas condiciones del área privada, y dar curso de manera simultánea a formas incipientes pero efectivas de planificación socialista que atiendan a la reproducción deseada de las nuevas relaciones de producción y a las demandas de las masas.

LA MUJER Y LA JUVENTUD, PROTAGONISTAS Y DESTINATARIOS DEL ESFUERZO DEL GOBIERNO POPULAR.

Todo el sentido de este esfuerzo de transformación y construcción revolucionaria tiene como protagonistas y destinatarios importantes a la mujer y a la juventud. En la reunión de la dirección política de la Unidad Popular se consideraron con especial detenimiento los problemas que las afectan y la necesidad de aumentar su participación directa para superarlos.

Se hace necesario entregar más atribuciones, recursos y poder de decisión a las organizaciones a través de las cuales se expresan hoy día las mujeres y entre ellas a las Uniones Comunales, Federaciones Provinciales y Confederación Nacional de Centros de Madres, las comisiones femeninas de todos los Consejos de la Central Única de Trabajadores y otras organizaciones de la mujer.

La igualdad plena de la mujer, la protección a su familia e hijos, la defensa de la madre soltera, su igualdad de oportunidades y de remuneración en el trabajo, son conquistas y aspiraciones que la Unidad Popular ha impulsado con decisión. Sus resultados serán necesariamente limitados en tanto no se profun-

dicen los cambios del sistema social y se avanza en la construcción de una sociedad socialista, lo que hace que la mujer sea objetivamente la más interesada en esa transformación revolucionaria.

Hay que redoblar, asimismo, el esfuerzo para concretar tareas ya planteadas en beneficio de los niños y de los jóvenes e impulsar otras nuevas, en el campo de la educación, del deporte, de la cultura, de la participación activa y plena de la juventud en el proceso que vivimos.

Es urgente multiplicar el número de jardines infantiles, tanto mediante la acción de los organismos administrativos correspondientes, como recogiendo las iniciativas que surjan desde la misma población. El medio litro de leche es un primer paso en una política que tiene que extenderse urgentemente, con vista a asegurar la igualdad efectiva de la infancia en su condición básica de vida y sus posibilidades de desarrollo físico e intelectual. Sin embargo estamos conscientes de que aún esta medida no se ha cumplido en plenitud, debido al burocratismo y la falta de una comprensión integral de su importancia, lo que estamos dispuestos a corregir para que nuestras medidas no queden en el papel. Tenemos el decidido propósito de asegurar a cada niño, independientemente de la situación ocupacional o el ingreso de sus padres, un número creciente de productos y servicios.

Las tareas que aborda el Gobierno Popular son realizables en la medida que son tomadas en sus manos por la clase obrera, los campesinos, los técnicos y profesionales, la intelectualidad chilena y las capas medias, y, especialmente, por la mujer y por la juventud.

Los partidos de la Unidad Popular, saludan la gran lección de patriotismo y la elevada conciencia revolucionaria que se expresan en los trabajos voluntarios de la juventud. Proezas como la reforestación del Tamarugal, las obras de irrigación de Cabildo, la instalación de establecimientos avícolas, las construcciones en poblaciones populares, el aporte de los estudiantes de la Universidad Técnica en la gran minería del cobre y en otras faenas industriales, indican que la juventud toma en sus manos la construcción del porvenir que le pertenece. El trabajo voluntario surge en las industrias y minas que rescatado el país como manifestación de que los trabajadores y el pueblo se sienten dirigentes de su patria y responsables de su progreso.

LA PARTICIPACION DEL PUEBLO Y EL CARACTER DEL ESTADO.

La realización de los cambios sociales exige, ante todo, una movilización de masas, en torno a los objetivos concretos que se derivan de esas mismas tareas. El retraso y la insuficiencia de trabajo en esta dirección constituyó uno de los principales temas de crítica y autocrítica en la reunión de la dirección política de la Unidad Popular, de la que surge, en consecuencia, como una de sus conclusiones centrales, la de hacer efectivamente del cumplimiento del Programa una tarea que tiene que tomar en sus manos el pueblo mismo.

Más, esta participación de los trabajadores debe ser real y democráticamente generada, en forma que llegue a todos los sectores, sean éstos de la Unidad Popular, demócratacristianos o independientes.

En primer lugar, esta participación es indispensable en la unidad productiva. Se hace urgente extender y profundizar la participación de los trabajadores en las empresas de las áreas social y mixta eliminando las dificultades formales encontradas para la constitución de los Consejos de Administración y venciendo la tendencia burocrática o tecnocrática de reducirlos a la atención de asuntos secundarios. En igual sentido es necesario articular la fiscalización de los trabajadores en las empresas del área privada, asegurando su acceso a la información sobre la marcha de las empresas. Es imperioso extender y mejorar las organizaciones de clase de los trabajadores, ampliándolas en los sectores de medianas y pequeñas empresas que constituirán en definitiva el área

de propiedad privada. Con vista a la movilización, según directrices únicas de clase, asumirá, por ejemplo, la mayor importancia, la formación de sindicatos por ramas acordada por la CUT.

A la ampliación y desarrollo de las organizaciones de clase de los trabajadores deberá asociarse un incremento considerable de las vinculaciones entre ellas y los vastos sectores de subproletariado marginado de las estructuras productivas y del conjunto de las masas populares de la ciudad y del campo. Aunque la política de empleo debe tender a ampliar el número de los trabajadores, los avances que se obtengan no podrán satisfacer por sí mismos la necesidad de integrar vastos sectores de la población interesados en las realizaciones del Gobierno Popular, pero que la reacción trata de aprovechar como base de apoyo. Habrá que reforzar la acción conjunta de la clase obrera con organismos tales como los Comités por Locales de Salud y las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, en torno a tareas concretas: control de los abastecimientos y precios, trabajos voluntarios de carácter social, formas de integración a los trabajos productivos. En las Juntas de Abastecimientos y Precios, esta acción comprende especialmente la participación de los pequeños comerciantes.

Una preocupación esencial deberá merecer el apoyo a las organizaciones de los funcionarios públicos, empleados de comercio, empleados de empresas privadas, etc., para cumplir programas de salud, previsión, educación, movilización, turismo popular y establecimiento de canales que permitan su participación y contribución a las tareas generales.

En el agro hay que ampliar la participación de los campesinos, a través de sus consejos, en todo el desarrollo de la política agraria. Para ello, junto con los derechos de las distintas organizaciones sindicales, cooperativas y de otra naturaleza, se dará a esos Consejos el máximo de apoyo y se procurará otorgarles los recursos económicos y el fuero que requieren. Precisamente, uno de los caminos para mejorar la eficiencia del aparato burocrático, es dar a esos Consejos mayores responsabilidades y participación en la elaboración de los planes regionales y locales, en su aplicación y vigilancia. De manera general, algunas decisiones básicas que han retrasado la formulación de una política común en la Unidad Popular, deben resolverse atendiendo a la voluntad y aspiraciones de los propios campesinos.

A todas estas iniciativas de movilización política debe corresponder un esfuerzo para hacer efectiva la presencia de los trabajadores en todo el actual aparato del Estado, como base para el desarrollo de un poder auténticamente popular.

Los servicios de salud, de educación, de vivienda, deben revisar su estructura y formas de funcionamiento para hacer accesible esa incorporación activa de los trabajadores y de la población interesada. De igual modo, hay que revisar la concepción de los Comités de Desarrollo Sectorial, para constituirlos en instrumentos de dirección del conjunto de la rama industrial respectiva que, mediante la presencia principal de los trabajadores, articule sus intereses como clase en relación con la gestión y control al nivel de las unidades.

Muchas tareas concretas quedarán, así, entregadas al pueblo mismo, bajo formas de participación que irán cambiando el carácter y la naturaleza del Estado. Es en ese cuadro que cabe iniciar jornadas de planificación, en las que se discutan los problemas de la población o el centro productivo, se impulsen iniciativas a las que tiene que responder el aparato administrativo, se propongan metas y se organice el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores. Así se resolverán conjuntamente los problemas de movilización, participación, planificación popular y consulta.

DESDE LA BASE SE CONSTRUYE EL SOCIALISMO.

La reunión que dió origen a la presente Declaración mantuvo el carácter unitario y laborioso que hemos dado a nuestro trabajo desde la formulación misma del Programa con que llegamos al Gobierno. Los problemas se estudian detenidamente, con acopio de antecedentes y con la mirada puesta en los intereses y el destino de las clases trabajadoras y de todo el pueblo.

Es nuestra firme decisión que tales características se confirmen y profundicen en el trabajo que nos queda por delante, que será aún más difícil que el realizado hasta el presente, debido a las restricciones objetivas de que ya hemos dado cuenta. Para ello reforzaremos con todo el ahínco de que seamos capaces la aplicación del método que nuestros principios y la experiencia histórica señalan como la más adecuada herramienta revolucionaria: el trabajo de las masas. Estudiar todo con las masas, resolverlo todo con ellas. Esta será nuestra línea fundamental de conducta, cada vez más generalizada y profunda. De las bases del pueblo no sólo deben emanar impulsos revolucionarios generales. Desde allí nacerán también, decisiones específicas cuya ejecución deberá ser practicada o controlada por las masas de forma cada vez más directa.

La expresión concreta de este proceso es la participación. Por ello, nos preocuparemos de que los mecanismos para ponerla en marcha sean constituidos e inicien sus funciones de inmediato. Reiteramos una vez más que a la participación están llamados todos, cualquiera que sea su color político. No nos interesa controlar los mecanismos de participación, sino que existan y trabajen.

Como todo el resto de los elementos del proceso, el mejoramiento de la cantidad del funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno dependerá en última instancia del trabajo de las masas y de su participación. Sin embargo, en ese terreno hemos comprobado urgencias que deben en afrontarse sin dilación alguna, a través de medidas en cuya implantación cabe responsabilidad especial a los partidos políticos. Hemos procedido a crear un grupo de trabajo con el encargo de establecer criterios que aseguren la máxima idoneidad en los nombramientos, la debida disciplina en la labor administrativa y la evaluación estricta del desempeño de los altos funcionarios militantes de nuestros partidos que ocupan cargos político-directivos en el aparato del Estado.

Por las mismas razones, respaldamos la decisión del Presidente de la República de proceder a una readecuación administrativa que produzca todas las separaciones y reasignaciones necesarias para mejorar la eficiencia y acentuar la disposición de trabajo y sacrificio de los altos funcionarios. Esperamos que esta disposición presidencial cristalice en el más breve plazo posible.

Creemos que han quedado claras las dificultades inherentes a un proceso revolucionario en marcha como el actual. Tenemos fé en el pueblo, para superar con él los problemas. Llamamos a la conciencia de toda la gente de izquierda a comprender que no es el momento de levantar falsas alternativas frente a la conducción política que la clase trabajadora ha entregado a la Unidad Popular en este momento histórico. Pretender hacerlo es dividir las fuerzas del pueblo y entregarle ventajas a la reacción y al imperialismo.

Pensamos que es el momento de sumar fuerzas para impulsar los valores permanentes de Chile, la libertad, la democracia y las posibilidades de la mayoría para acceder al bienestar. Estos valores, por tantos años pisoteados por la oligarquía, hoy adquieren su verdadera dimensión y deben alcanzar con el esfuerzo y la lucha de todos, una ampliación cada vez mayor.

Finalizamos, repitiendo una observación inicial. A partir de este informe esperamos que se produzcan miles de consultas, reuniones y jornadas de análisis. A todas ellas concurrirá la Unidad Popular con el más sincero propósito de dialogar y aprender. Nada nos apartará del pueblo. Desde su seno seguiremos construyendo la dignidad de Chile.

COMITE NACIONAL DE LA UNIDAD POPULAR

Santiago, 9 de Febrero de 1972.



LA FABRICA Y LA ESCUELA

Las luchas obreras y estudiantiles de estos últimos años han ampliado grandemente el campo de acción del movimiento obrero. Por una parte, estas luchas han planteado de manera aguda y concreta problemas que hace solo algunos años habrían parecido completamente abstractos. Por otra, lo que nos parece característico de la situación actual es la existencia de un potencial de lucha a veces más avanzado que los objetivos que el movimiento mismo se da. Mayo 1968 en Francia, las luchas estudiantiles y, en una cierta medida, las luchas sindicales en Italia y en otros países capitalistas testimonian de una ausencia de estrategia que a menudo es ausencia de objetivos.

Hecho que es evidente, por ejemplo, en la relación entre la fábrica y la escuela, es decir, entre las fuerzas sociales más explosivas de esta fase del desarrollo capitalista: los estudiantes y los obreros.

El problema esencial creemos que está en la relación entre los diferentes niveles de la contestación, de las diversas formas de luchas sociales y de sus agentes. En las notas que siguen, partiremos de algunos aspectos de las estrategias actuales, sindicales y de otro tipo, para analizar algunas de sus correlaciones. Abordaremos, esencialmente, cuatro tipos de cuestiones:

- el problema de una nueva definición de las calificaciones obreras y por tanto de una nueva escala de clasificaciones (ilustrando este punto con la reciente su presión de la valoración de puesto de trabajo en la ITALSIDER (2));
- la relación entre una nueva política de clasificaciones y una organización del trabajo diferente;
- algunos aspectos de las crisis de la escuela y la relación entre el control obrero sobre la organización del trabajo y la reestructuración radical de la escuela;
- la relación entre organización del trabajo y escuela, por unaparte, y duración del trabajo y empleo, por otra.

El objetivo de estas notas no es analizar detalladamente todos estos temas: se trata mas bien de proposiciones de discusión para una estrategia de la izquierda cuyo problema esencial, en nuestra opinión, es el de la unificación de las diferentes fuerzas sociales en lucha.

LA ELIMINACION DE LA VALORACION POR PUESTO DE TRABAJO.

La eliminación de la valoración por puesto (o "análisis y evaluación del trabajo") que caracteriza el reciente acuerdo de la ITARSIDER sobre una nueva escala de clasificación representa, en cierto sentido, el fin de una época. La valoración por puesto simbolizaba el grado más complejo y refinado de la pretendida "organización científica del trabajo". Era también el punto en el que la intervención de los trabajadores sobre la organización del trabajo y su porvenir

(1) El presente artículo ha sido redactado por A. Lettieri, dirigente de la FIOM-CGIL, responsable de la plataforma de huelga de los siderurgicos, a la cual se refiere en varias ocasiones. El artículo apareció con el título "Notas sobre calificación, escuela y horario de trabajo" en el nº 49 de "Problemi del socialismo", y fué posteriormente publicado en francés por "Les Temps Modernes" en su nº de Agosto-Septiembre de 1971, con el título que lleva en la presente traducción.

(2) La ITALSIDER es una empresa siderúrgica del grupo de empresas del I.R.I. italiano -institución de la que se copió el I.N.I. español-. Está controlada por el Estado, y es el principal productor de hierro y acero en el país, con plantas en Genova y Tarento, entre otras.

profesional era más débil (3).

Por su pretensión de establecer una "relación" rigurosa entre el nivel de remuneración y la naturaleza de la tarea (descompuesta en términos de formación, de requisitos físicos, etc...), la valoración por puesto de trabajo no se aplicaba bien más que a las tareas parcelizadas, repetitivas y simples. Por ello no se limitaba a reflejar, sino que tendía a acentuar la paralización de las tareas y la diferenciación de los salarios.

Cuando los trabajadores de la ITALSIDER elaboraron en el primer semestre de 1970 una plataforma para reemplazar el sistema de clasificación en vigor, se trataba de "inventar" colectivamente un sistema nuevo. No existía en realidad, modelo que correspondiera a las nuevas concepciones y exigencias de los trabajadores, ni en la siderurgia italiana ni en la de los demás países capitalistas. Incluso, allá donde los sistemas de clasificación se fundan aparentemente en criterios de clasificación profesional, el salario viene siempre sobredeterminado por las condiciones ambientales (penosidad, calor, riesgo, etc...). Era preciso por tanto, hacer abstracción de éstas en la definición de los índices de clasificación con el fin de rehusar toda "monetización" de condiciones de trabajo insalubres o nocivas.

Pero, una vez hecho esto, ¿cómo valorar la clasificación profesional de una tarea?; ¿en qué consiste la calificación en la siderurgia, separada de las condiciones reales en que se ejerce?; ¿Cómo definir la calificación profesional abstracta del fundidor o del laminador, sin tener en cuenta las condiciones (de calor, de polvo, de ruido, etc...) en que se encuentra el trabajador?; ¿qué relación existe entre la calificación profesional de un tornero o de un ajustador que se encuentran al margen del proceso siderurgico propiamente dicho?. Había que responder a estas preguntas, no solo porque habrían resurgido en las proposiciones patronales, sino también porque planteaba problemas en la conciencia de los trabajadores. Ninguna proposición elaborada en gabinete habría sido satisfactoria.

El método empleado en la ITALSIDER ha sido la discusión colectiva, con un objetivo totalmente nuevo: se trataba de determinar concretamente cuantos "niveles" hacían falta para clasificar a más de 40.000 trabajadores, haciendo abstracción tanto del sistema patronal de "análisis y valoración del trabajo" como de la escala de clasificaciones de los convenios. La principal característica de este trabajo colectivo de análisis y de reflexión sobre la organización del trabajo es que ha sido llevado directamente por los obreros a partir de los equipos, de los talleres, de las zonas, confrontando progresivamente los resultados, en primer lugar en la planta, y más tarde, a nivel de "trust".

Los trabajadores se han forjado de este modo una opinión sobre el problema de las clasificaciones. La proposición, hecha por un grupo extrasindical, de una sola clase, no tuvo ningún éxito. Se puede decir que los trabajadores han "auto-definido" una escala de clasificaciones, reduciendolas, sin embargo, al mínimo. El sistema precedente repartía a los obreros en 24 clases: la clasificación propuesta preveía en total 6 clases para los obreros y los empleados; de ellas, solo había cuatro de obreros, siendo la más baja una clase de transición. El otro aspecto interesante de la discusión se refería a los criterios de promoción de una clase a otra, a través de la adquisición individual y colectiva de conocimientos y de capacidades crecientes de intervención sobre el ciclo de producción

El resultado, después de un conflicto que ha sido de los más duros del otoño de 1970, no se aleja mucho del espíritu inicial de la plataforma. El acuerdo se ha realizado sobre 8 clases para el conjunto de obreros y empleados. Pero lo importante no es el número de clases en sí, lo que merece atención es su signi-

(3) Por definición, la valoración por puesto de trabajo supone un abanico muy amplio de remuneraciones. Había en la Italsider 24 clases para los obreros y 16 para los empleados y las categorías especiales. El carácter artificial de esta jerarquización contrastaba con las tendencias igualitarias cada vez más sonsibles en el personal.

ficación o, más claramente, el modo cómo han sido obtenidas. Hemos dicho más arriba que las reivindicaciones de partida (6 clases) eran el fruto de una apreciación colectiva de los trabajadores. El acuerdo sobre las 8 clases no es nada más que la expresión de una relación de fuerzas entre, por una parte, los trabajadores y su voluntad de fijar un número limitado de clases (4), y por otra parte, el patrono, cuyo interés era reducir este número al mínimo posible (Había propuesto 14 clases al principio, 10 después) con el fin de conservar sus posibilidades de maniobra tanto en la organización del trabajo como en la escala salarial.

No hemos recordado esta experiencia a título de anécdota; nos parece que contribuye a demostrar muy claramente una verdad de carácter general: la única "objetividad" de un sistema de clasificación es una objetividad convencional: el problema consiste en saber quién es el más fuerte en el momento de determinar la escala de clasificaciones y los objetivos sobre los que se funda. En realidad la clasificación de los trabajadores en una empresa, incluso si se refiere formalmente a textos contractuales, ha sido siempre un aspecto de la organización del trabajo que escapa al control de los trabajadores y de los sindicatos.

EL SISTEMA DE CLASIFICACION EXPRESION DE UNA RELACION DE FUERZAS.

De hecho, trabajadores de calificación igual que cumplen tareas comparables se ven repartidos en 2 ó 3 clases diferentes. Por otra parte, la relación entre la clase que se atribuye y el salario que se cobra es totalmente aleatoria. Incluso, cuando para trabajadores de una misma clase, los salarios medios son más o menos los mismos en las diversas fábricas de un trust, no se trata más que de una igualdad formal. En efecto, "los criterios de clasificación son tan diferentes que, en definitiva, un trabajador es clasificado en función del salario que se le quiere conceder y no a la inversa" (Informe general sobre la encuesta del ENIRI sobre salarios efectivos, 1968).

Se observa a veces que los diferentes niveles de salarios oscilan en torno a una media pretendidamente determinada por el mercado de trabajo. De la encuesta citada se deduce, por ejemplo, que los salarios medios reales de los soldadores, torneros, ajustadores y preparadores de máquina son los mismos, con un 2 ó un 3% de diferencia. Se podría deducir de ello que existe una unidad relativa del mercado de trabajo para este tipo de calificación. Sin embargo, en la mayor parte de las empresas consideradas, la dispersión de los salarios alrededor de esta media es del orden del 50 al 80 %. Bajo cualquier punto de vista que se considere, es evidente que la escala de clasificaciones y de salarios es función de la política de personal de cada empresa.

De ahí debe partir la respuesta obrera a la política de clasificaciones: su objetivo debe ser la gestión por los trabajadores del sistema de autodeterminación de los criterios que deben regirlo.

Una nueva política de clasificaciones no puede, sin embargo, limitarse a exigencias puramente salariales: debe insertarse en una estrategia que tienda a establecer el control social de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo. El problema de las clasificaciones, planteado únicamente en términos de escala de salarios, no podría llegar en realidad más que a soluciones ilusorias.

(4) Las 6 clases correspondían a un nivel de entrada, 3 niveles escalonados comunes a obreros y empleados, dos niveles suplementarios para cuadros, empleados y técnicos. El examen más profundizado de la plataforma, en el curso de la lucha, por un número más importante de empleados y técnicos, ha mostrado que los 6 niveles suponían para estos cuadros una comprensión de su salario demasiado importante para ser realista. A partir de ello, el sindicato retuvo los 8 niveles de salarios que figuran en el acuerdo final.

CUALIFICACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO.

El fondo del problema de las clasificaciones reside en la organización del trabajo. La cualificación del trabajador, su capacidad profesional, no es un elemento estático y objetivo. Es más bien el resultado inestable y provisional, y por tanto, transformable colectivamente, de una cierta técnica que tiende a subutilizar las capacidades generales que exige al comienzo al trabajador, hasta mutilar y esterilizar sus facultades individuales y colectivas.

En este sentido, el problema no puede reducirse a la exigencia de una clasificación "equitativa". La tarea esencial es restituir al trabajador la posibilidad de realizar sus capacidades y de realizarse a través de su trabajo: es decir, la posibilidad de conocer, de apropiarse, de transformar el proceso de producción sacando partido de las potencialidades del desarrollo científico y técnico.

No se trata aquí, evidentemente, de rehabilitar la concepción tradicional del oficio y su concepción más o menos corporativista; ni de rehabilitar la idea de cualificación profesional que ha prevalecido hasta ahora, cambiando su sentido: es decir, considerando como elementos de la "cualificación" la polivalencia creciente de los trabajadores, su capacidad de adaptarse a la rápida evolución tecnológica, etc... Este truco puede ser rentable en la negociación de un acuerdo de empresa o de rama, pero corre el peligro de enmascarar el fondo del problema, que es la transformación de la organización del trabajo que los trabajadores deben imponer y no el reconocimiento formal y la retribución de las capacidades "potenciales" que no permitirá despegar jamás. Obtener la reclasificación en una clase o rama superior sin que la naturaleza del trabajo, su parcelización, su monotonía haya cambiado, es sencillamente hacerse pagar más caro el embrutecimiento y el agotamiento cotidianos, aludiendo el problema fundamental: el de la reconquista de un poder obrero sobre la organización del trabajo.

Por otra parte, la pérdida de vigencia de las viejas concepciones del oficio y la crisis de la "organización científica del trabajo" han movilizado desde hace bastantes años en Europa y, desde hace unos treinta años en Estados Unidos, a psicólogos, sociólogos y economistas al servicio del capital para encontrar métodos de organización más eficaces que los viejos sistemas de Taylor y de Ford. La recomposición y el enriquecimiento de tareas han sido experimentados por grandes empresas como Philips e IBM. Se trata de técnicas nuevas de organización del trabajo que no modifican en nada la ideología del rendimiento y de la explotación; están, al contrario, a su servicio. La "puesta en valor de la personalidad del trabajador" y de sus capacidades se ha convertido en un medio para atraer la mano de obra, hacerla fiel, oponerse al absentismo y prevenir los conflictos.

En la medida en que estas nuevas técnicas de organización del trabajo son adaptadas y puestas a punto por el patrono en un contexto de subordinación cultural y política de los trabajadores, se convierten en medios de integración, de "personalización del trabajo", que al mismo es despersonalización del trabajador. Por otra parte, estas experiencias han sido intentadas hasta ahora sólo a nivel de empresas aisladas.

Pero el que tales técnicas de recomposición del trabajo, de autodirección de grupo, de promoción colectiva, etc..., existan, es un hecho importante en sí, que muestra cómo, a menudo, los patronos se liberan más fácilmente y más deprisa de ciertos prejuicios culturales que la clase obrera; muestra que se pueden encontrar soluciones que reemplacen a la actual división técnica del trabajo; y muestra también que tales soluciones son políticamente ambiguas. No se trata de limitarlas mecánicamente ni de rechazarlas por el hecho de que hayan sido experimentadas por patronos (por

otra parte, rarísimos). Por el contrario, es preciso de nuevo recordar que las técnicas no son datos objetivos: dirigidas por los patronos, serán una solución patronal; serán una solución obrera si son gestionadas colectivamente por la clase obrera con plena conciencia de su significación técnica y política.

Una nueva política de clasificaciones debe, por tanto, ligar estrechamente la lucha contra las disparidades de salario y la lucha por una organización diferente del trabajo, primer paso hacia el control social de los obreros sobre el proceso de producción. Se trata de dos aspectos complementarios, ya que las disparidades resurgirán inevitablemente en tanto que la organización tradicional del trabajo no sea abolida. Si la iniciativa de su reforma parte del patrono, consolidará su poder sobre la división del trabajo y sobre el nivel de salarios a la vez. Si la iniciativa es tomada por los trabajadores en términos de contestación y de lucha, con vistas a modificar a la vez el salario y la organización, será preciso comenzar por la contestación de la escala, a menudo, a fin de hacer saltar una situación bloqueada y preparar el terreno a la lucha sobre el fondo.

En otros términos, un obrero de montaje que repite cada pocos segundos los mismos gestos elementales puede ascender a Especialista a nivel superior, pero esta promoción no le dará más que algunos céntimos por hora. El problema decisivo sigue siendo el de la organización del trabajo: es decir, la recomposición de las tareas, intervenciones más largas y más complejas y de una cierta rotación para reunificar las funciones de producción de control, de utillaje, de reglaje y de mantenimiento. Pero, puesto que no se puede obtener esta transformación de una sola vez, el primer paso es la negación política y práctica de una escala de clasificación arbitraria que encierra en su "ghetto" sin salida a grandes masas de trabajadores destinados a operaciones repetitivas, degradantes, embrutecedoras.

Una política reivindicativa concreta, inserta en una estrategia a largo plazo, debería tender a reagrupar a los trabajadores en dos clases solamente que por comodidad se puede continuar llamando "calificados" y "especializados", teniendo como objetivo un enriquecimiento permanente de las capacidades teóricas y prácticas requeridas por el trabajo, de modo que permita a todos el pleno desarrollo de sus facultades individuales y colectivas. Además, la "carrera" obrera no tiene porqué pasar por la calificación y la formación tradicionales dado que la rapidez del desarrollo hace artificiales y vanas la mayor parte de las distinciones: ¿en que se distingue, por ejemplo, un técnico "obrero" de un técnico "empleado"? La reivindicación de una escala de clasificación única obreros-empleados adquiere así sentido.

LA FABRICA Y LA ESCUELA.

Es imposible plantear correctamente el problema de las calificaciones sin atacar la división del trabajo, pero también es imposible atacar la división del trabajo sin hacer entrar en el problema a la escuela.

El esfuerzo de los trabajadores por someter el proceso de trabajo a su poder choca con el rápido envejecimiento prematuro y acelerado de su saber técnico y con la insuficiencia de conocimientos a los que tienen acceso. De ello se deduce la necesidad para el movimiento obrero de recuperar y transformar la función de la escuela y la ciencia.

La existencia en Italia de cerca de un millón de trabajadores que frecuentan los cursos de noche es el signo de una aspiración masiva: escapar a la condición obrera volviendo a la escuela. Pero este intento fracasa casi siempre, porque no hay relación entre la escuela y la fábrica, entre la necesidad de cambiar la naturaleza y la organización del trabajo y lo que

la escuela enseña: la encuesta de Turin demuestra que, casi siempre, los trabajadores conciben la escuela como un medio de evadirse de su condición para obtener una posición "más elevada" que puede muy bien ser igualmente alienante (5).

Hay que replantear, pues, el problema de la manera más radical: se trata de reconocer el derecho a todos los trabajadores, jóvenes o adultos, no solo de utilizar la escuela, sino también de contribuir a transformarla a revolucionarla, a gestionarla. Sé que es fácil tratar de "no realistas" proposiciones que chocan con las tradiciones intelectuales más arraigadas, acostumbrados a vivir en un sistema en el que el capitalismo nos ha acostumbrado a que el trabajo manual y el intelectual se nieguen recíprocamente. Negación que es además un aspecto típico de la ideología pequeño burguesa que tiene terror del trabajo manual y, sobre todo, del de fábrica.

Si no fuera posible romper el aislamiento de la fábrica, las aspiraciones de capas crecientes de trabajadores serían utópicas. Habría que renunciar a una línea de acción que tiende a cambiar la organización del trabajo, habría que renunciar a unir a los estudiantes y a los obreros que actúan separadamente y que pueden ser combatidos separadamente, como ocurre en todos los países capitalistas.

La inversa es igualmente verdad. La crisis de la escuela se debe directamente a su separación del mundo de la producción. La escuela actual es una escuela de clase, no solamente por la discriminación con respecto a los hijos de los obreros, sino sobre todo por su discriminación de cara a los obreros mismos. Se nos dice que su naturaleza de clase persistirá y se reforzará a pesar de la generalización de la enseñanza post-secundaria. Ello se debe a que la naturaleza real de clase de la escuela proviene de la separación que introduce entre "cultura" y producción, entre ciencia y técnica, entre trabajo manual y trabajo intelectual. El capitalismo de hoy no rehúsa, de hecho, el derecho a la escuela; a lo que se niega, es a cambiar la función social de la escuela.

El ejemplo norteamericano aporta una ilustración muy clara de esta negativa. La escuela se ha convertido en un elemento importante de hipertrofia del sector terciario, típico de una sociedad marcada por el despilfarro y la esterilización de las energías productivas. La escuela deja de ser una opción libre, un momento del desarrollo individual y colectivo.

Se impone a la juventud a la que no se le ofrece otra opción que el paro (o el ejército).

La escuela, como lo demuestra el análisis de algunos sociólogos norteamericanos, es un medio de retrasar la entrada de la mayoría de los jóvenes en el mundo de los adultos y del trabajo. A través de la escuela, millones de jóvenes se ven obligados al trabajo improductivo del que Baran y Sweezy piensan que es indispensable para enfrentarse con el excedente que amenaza con asfixiar al sistema americano. En 1965, 52,1 % de los jóvenes de 17 a 24 años eran estudiantes, militares o parados, y 37,4 % estaban en la universidad (6).

Se trata de uno de los aspectos más catastróficos de la sociedad capitalista más desarrollada. Para la mayoría de los jóvenes de 18 a 24 años, la escuela es el único medio de escapar al ejército o al paro. En los últimos cinco años, la situación se ha agravado considerablemente, así a finales de 1970, el número de parados ha sobrepasado el 6 % de la población activa y cerca del 18% de los jóvenes no había podido encontrar su primer empleo. La escuela se ha convertido en una institución cuya función es absor-

ver la fuerza de trabajo excedentaria, esterilizar las energías productivas que el capitalismo no podría utilizar. Según el Comité de consejeros económicos del presidente de EEUU, los jóvenes mantenidos al margen de la producción pierden una renta del orden de 30 mil millones de dólares al año. Los estudios pasan a representar, en este contexto, un trabajo improductivo forzado no pagado. Es una de las formas más flexibles y al mismo más alienantes de explotación.

Estos hechos son significativos. En primer lugar, muestran la insuficiencia del análisis tradicional que se contenta con denunciar la "funcionalidad" de la escuela para la producción capitalista. Esto no es verdad más que en una cierta fase. Más allá, la escuela se hace funcional para la no-producción, para el despilfarro, para la separación de los jóvenes del mundo del trabajo, de la vida adulta. La descalificación de la escuela corresponde a este crecimiento a la vez monstruoso y estéril. La supresión de los mecanismos de selección escolar deja de estar en contradicción con las exigencias del capitalismo.

La escuela puede contentarse con producir superalfabetizados y nada más, como la sociedad del consumo produce niños supervitaminados. Una parte creciente de los jóvenes que salen de la escuela no tiene otra posibilidad que volver a ella como cuerpo docente. La selección de los cuadros técnicos superiores no se realiza ya en la escuela de masas, sino en superescuelas o en super-universidades especiales, rigurosamente dirigidas y controladas por las instituciones capitalistas que las necesitan.

La crisis de la escuela, en la sociedad capitalista actual, reside menos en una limitación del derecho a los estudios que en la negativa del derecho al trabajo: al trabajo productivo y libremente escogido. La escuela se abre a masas crecientes de jóvenes, pero para aprisionarlos en estructuras deformadas; tiene, de hecho, una función estabilizadora del sistema.

LA ESCUELA COMO TRABAJO IMPRODUCTIVO FORZADO.

Los estudios realizados en Italia sobre la evolución futura de la relación escuela-empleo indican tendencias semejantes a las observadas en EEUU. El ISRIL prevé, para 1980, un número de diplomados muy superior al número de empleos disponibles (7). Por el contrario, el CENSIS (8) estima que habrá, por lo menos hasta 1975, deficit de diplomados; pero es significativo, en relación a lo ya señalado, que cerca del 60 % de los diplomados estén destinados a entrar en la enseñanza. En otras palabras, la escuela se presenta como la única industria capaz de absorber la mano de obra en los próximos años, sea bajo la forma de estudiantes, a los cuales se les presenta cada vez en menor medida la perspectiva de entrar en la producción, sea bajo la forma de licenciados a los que no les queda más remedio que permanecer en la escuela. (no es casual que el "Proyecto 80" prevea pa

- (5) La encuesta está resumida en "I laboratori studenti. Testimonianze raccolte a Torino" por G. Levi Adrian, G. Alasia, A. Chiesa, P. Bergoglio y L. Benigni, introducción de V. Foa. Ed. Einaudi. Turin, 1969.
- (6) "La jeunesse comme classe", John y Margaret Rowntree, en Revue Internationale du Socialisme, nº 28-29.
- (7) N. Cacace y M. d'Ambrosio (Isril): Domanda e offerta di Laureati in Italia suplemento al nº 2 de Futuribili.
- (8) Censis, Lo strutture formative al 1975, Roma, 1966.

ra 1980 alrededor de 1.150.000 docentes contra los 265.000 de 1965). Mientras que las ofertas de empleo en la industria se restabilizan, la oferta de empleo en la enseñanza se prevee que se multiplique por más de 4 en el espacio de 15 años (9).

De este modo, la escuela se presenta, tanto desde el lado de los jóvenes que estudian como de los docentes, como una válvula de seguridad para el mercado de trabajo, como un medio de enmascarar el número creciente de parados parciales producidos por el desarrollo del capitalismo.

Pero el aspecto esencial es la separación institucional de la escuela con el mundo del trabajo. El desarrollo capitalista de la escuela institucionaliza la división entre trabajo productivo y trabajo improductivo; tiende a esterilizar inmensas energías físicas e intelectuales separándolas de la realidad de la producción. La escuela se convierte, en cierto sentido, en función de sí misma. En este contexto, la gestión social de la escuela actual, propuesta por las fuerzas de izquierda, puede ser otro modo de consolidar esta función separada y de avalar su papel de estabilizador capitalista.

La crisis de la escuela es, bajo este ángulo, un aspecto de la crisis general del sistema. Lo importante no es ya el control de este tipo de escuela sino la subversión de su función: su reintegración en el mundo del trabajo productivo, en el mundo de la dialéctica social y, en consecuencia, de la reunificación de la teoría y de la praxis, de la cultura y de la política. Es el único medio de reunificar socialmente, y no de manera puramente abstracta, la fábrica y la escuela y las fuerzas que actúan dentro de ambas. Ello significa reconstruir al mismo tiempo, la escuela sobre la base de una gestión social que realmente reemplace a la enseñanza actual y no solo a la actual forma de administrarla.

La relación entre la escuela y la fábrica es, por tanto, doble. Por una parte, el problema de la escuela está ligado al de la calificación y al control social sobre la organización del trabajo; por otra parte, solamente la transformación de la organización del trabajo y una utilización diferente de la ciencia y de la técnica pueden secar a la escuela de su función de institucionalización de un trabajo improductivo forzado.

EL DERECHO A LA ESCUELA Y EL DERECHO AL TRABAJO.

Para el movimiento obrero, se trata, pues, de colocar las exigencias de los trabajadores estudiantes en una perspectiva estratégica más general reivindicando de este modo el derecho a la escuela para todos los trabajadores y, al mismo tiempo, el derecho al trabajo para todos los estudiantes, lo cual significa sacar a los trabajadores y a los estudiantes de los "ghettos" en que actualmente están encerrados; significa también liberar energías inmensas actualmente esterilizadas.

Pero debemos ser conscientes que un objetivo de tal alcance supone la revisión total de la relación tradicional entre escuela y clasificación profesional, imponiendo un enfoque más directamente político que englobe el problema de la organización del trabajo, del desarrollo industrial y del empleo. Una línea que tienda a romper la separación entre la fábrica y la escuela debe articularse hoy alrededor del problema de la duración del trabajo. La actual duración media del trabajo tiene dos consecuencias negativas que se suman: separa a los trabajadores de la escuela, separa a los estudiantes de la producción.

(9) Ver el informe de A. Asor Rosa en el Congreso sobre "Formación de la fuerza de trabajo y las salidas profesionales", Roma, 29-30 mayo 1970

Las 40 horas semanales, conquistadas con los acuerdos de 1969-70, repartidas en jornadas de trabajo de 8 horas, no permiten a los trabajadores una actividad escolar verdadera. (Los trabajadores que hacen el enorme sacrificio de estudiar después de su jornada de trabajo no consiguen hacerlo realmente). Por otra parte, la semana de 40 horas, con las actuales normas técnicas y de productividad, impide a los jóvenes entrar en la producción, los "condena" a la escuela.

En un reciente artículo, Garavini ha insistido en la necesidad de plantear como objetivo sindical la reducción de la semana de trabajo a 36 horas, al mismo tiempo que la jornada continúa de 6 horas. La jornada continúa con reducción de la duración del trabajo es, en efecto, en el contexto del desarrollo científico y técnico, la condición para unir de nuevo el trabajo práctico y el trabajo intelectual, la producción y la escuela, dejando ésta de ser una institución separada para convertirse en un instrumento permanente de formación (10).

¿Se nos va a objetar que se trata de una perspectiva a muy largo plazo, un objetivo utópico?. Insistiremos entonces en que, por el contrario, se trata de una línea de acción concreta, práctica y eminentemente actual. En primer lugar, en Italia (aunque esto vale también para la sociedad capitalista más avanzada, los EEUU) es el único modo de plantear concretamente el problema del paro. La reducción de la jornada de trabajo a 36 horas semanales, como objetivo a corto plazo, permitiría la entrada en la producción de por lo menos 500.000 trabajadores. No es casual, en este sentido, que el aumento de cerca del 2 % del número de empleos industriales haya venido determinado, de modo casi exclusivo, por la reducción contractual de la duración media del trabajo.

La objeción según la cual la industria italiana debería entonces soportar las cargas suplementarias con relación a la de los demás países capitalistas no es aceptable por dos razones. La primera es que se impone siempre una opción entre los objetivos reivindicativos. La reducción de la semana de trabajo a 36 horas pagadas 40, representa para las empresas un aumento de cargas comparable a la que llevaría consigo la introducción del 14º mes (la 13ª paga es un hecho ya en Italia).

Para el sindicato, se trata de conseguir los objetivos reivindicativos en función de una estrategia precisa, capaz de unificar al movimiento.

En lo que se refiere a la industria y a su competitividad, debería que dar claro que, teniendo en cuenta el peso creciente de los costes y del capital fijo, el beneficio de las empresas está más determinado por la duración de la utilización cotidiana de las instalaciones industriales (y, por tanto, por el número de equipos cotidianos y semanales) que por el coste absoluto del trabajo. Se podría plantear, por ejemplo, una negociación global que ligue la reducción de la duración del trabajo a 36 horas a nuevas condiciones de utilización de las instalaciones.

Este tipo de reflexión está muy lejos de ser abstracto. En 1970, el problema de la duración de utilización de las instalaciones industriales se ha planteado ya en relación con la reducción contractual de la duración del trabajo y, sobre todo, con la fuerte disminución de las horas extraordinarias.

La reacción de los industriales ha sido pedir la realización de horas extras, y el aumento del número de equipos. En su respuesta, el sindi-

(10) S. Garavini. "Le nuove strutture democratiche in fabbrica e la politica rivendicativa", en "Problemi del Socialismo", nº 44.

cato metalúrgico ha hecho depender las soluciones del contexto económico local: en las regiones congestionadas -en las que no se puede plantear el atraer trabajadores suplementarios- el sindicato ha apoyado las reivindicaciones que tenían como objeto la reducción del número de equipos semanales (por ejemplo, supresión del trabajo de domingo y de sábado tarde), a la supresión del trabajo de noche, al rechazo de hacer horas extras.

En las regiones con paro importante, por el contrario, un comportamiento más flexible ha sido adoptado: el aumento del número de empleos se liga a una utilización más intensiva de las instalaciones, y en consecuencia, a un aumento del número de equipos; ello permite unificar a obreros y parados, creando de este modo una contrapartida social y política al sacrificio que representa para los trabajadores el trabajo del sábado y del equipo de noche.

EL HORARIO DE TRABAJO Y LA NUEVA ESCUELA.

Si las 36 horas coincidieran con la introducción de un segundo o un tercer equipo, a fin de hacer trabajar a las máquinas 12 ó 18 horas por día en donde no lo hacen más que 8 ó 16, la producción aumentaría en las regiones desarrolladas sin que fuera necesario recurrir a inversiones suplementarias (en la medida, al menos, en que existen disponibilidades de mano de obra local, lo cual ocurre en general ahora, al estar excluidos los jóvenes y las mujeres de la producción). Se podría concentrar entonces la mayor parte de las nuevas inversiones en el Mezzogiorno (Sur de Italia) y en otras regiones de escaso desarrollo industrial.

Todo ello nos lleva de nuevo al problema del que hemos partido: la relación entre escuela y producción, entre tiempo de trabajo y tiempo disponible para estudiar. En el marco de la jornada de trabajo de 6 horas pagadas 8, se podría replantear la idea del "tiempo parcial" bajo otra perspectiva: cuatro horas de trabajo que dejan bastante tiempo para estudiar o para cualquier otra actividad social. Desde el punto de vista del salario, se pueden formular varias hipótesis. Se podría prever, en un primer periodo, la retribución de las 4 horas trabajadas, que equivaldrían a la mitad del sueldo normal. Más adelante, se podría considerar que las horas de estudio y las horas de trabajo valen lo mismo, debiendo ser pagadas íntegramente (a través de una caja mutua, a la cual contizarían todas las empresas). La reducción de la jornada de trabajo a 6 horas implica en sí mismo una relación diferente entre tiempo de trabajo y tiempo libre, entre trabajo práctico y trabajo intelectual. La reducción paralela de la duración del trabajo a cuatro horas permitiría concretamente a los jóvenes compartir su actividad entre la escuela y la producción, lo cual implicaría una apertura recíproca de ambas instituciones frente a la separación rigurosa en que las mantiene la sociedad capitalista.

Al mismo tiempo, la reducción de la semana de trabajo normal de 40 horas a 36 horas y la institución de una semana de trabajo de 24 horas para los jóvenes y las mujeres que no pueden o no quieren trabajar a pleno tiempo, permitiría la creación de centenas de millares de nuevos puestos de trabajo y haría cambiar de signo la actual tendencia a la contracción patológica de la mano de obra.

Para concluir, la relación entre la fábrica y la escuela aparece claramente no sólo a nivel de las clasificaciones (control social sobre la organización del trabajo) sino también a nivel de la duración del trabajo que es la clave para todo intento de sobrepasar la alternativa entre escuela y fábrica. Esta alternativa se reproduce, de modo inverso, en la conciencia de cada trabajador: en primer lugar, una escuela cortada de la realidad de la producción, encerrada en su irrealidad, después, la realidad de la producción separada de la evolución de la ciencia de la cultura.

¿Estas hipótesis son aventuradas o utópicas?. La respuesta no es posible mas que a través del análisis de las nuevas tendencias del movimiento obrero. Los trabajadores rehúsan someterse a la falsa objetividad de la técnica: la organización "científica" del trabajo es contestada; el sistema de clasificaciones está en crisis. Frente a estas contradicciones crecientes y a la crisis de la escuela, el capitalismo vacila entre dos vías aparentemente contradictorias, pero complementarias en realidad: el reformismo y la represión. No es casual que 1970 se haya terminado por una llamada contra las luchas obreras y estudiantiles, contra el nuevo espectro que atomiza Europa: las "minorías" contestadoras. Estas "minorías" son en realidad, grandes masas de trabajadores y de estudiantes. La represión y el reformismo no tienen más que un objetivo: separar estas fuerzas sociales explosivas, separa los lugares de producción de la escuela. De este modo, se separa sobre todo el momento de la cultura del de la producción. Su unidad no existe más que para una élite que detenta el poder económico y político.

La respuesta de movimiento obrero a esta doble crisis no puede consistir en proposiciones de reformas separadas destinadas a cambiar sólo las apariencias, sin tocar el fondo. La respuesta sólo puede ser global, para poder unificar lo que el capitalismo tiende a dividir: a los obreros entre ellos, al mundo de la producción y al de la cultura, a la escuela y la fábrica, a los estudiantes y a los trabajadores.

ANTONIO LETTIERI

